



FORMA A-55  
22

COMPETENCIA NUM. 517/95. SUSCITADA  
ENTRE EL JUEZ PRIMERO DE  
DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL D. F.  
Y EL JUEZ TERCERO DE LO CIVIL  
DEL D. F., PARA CONOCER DEL  
JUICIO ORDINARIO MERCANTIL 1349/94 ó  
128/95, PROMOVIDO POR CEREZO,  
S.A. DE C.V. EN CONTRA DE GONZALEZ  
ZORRILLA, S.A. Y OTRA.

MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.  
SECRETARIO: JUAN RAMIREZ DIAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la  
Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día  
quince de octubre de mil novecientos noventa y siete.

VISTOS ; para resolver los autos de la competencia  
número 517/95, suscitada entre el Juez Primero de Distrito en  
Materia Civil en el Distrito Federal y el Juez Tercero de lo Civil  
del Distrito Federal, para conocer del Juicio Ordinario Mercantil  
número 1349/94 o 4389/94, promovido por CEREZO, S.A. DE  
C.V., en contra de González Zorrilla, S. A. y Otra, y

### RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado en la Oficialía de  
Partes Común, Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia  
del Distrito Federal, el primero de julio de mil novecientos  
noventa y cuatro y que fue recibido el día cuatro de ese mes y año  
en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Federal, Joaquín  
Jiménez-Labora, en representación de CEREZO, S.A. DE C.V.,

demandó en la vía ordinaria mercantil a GONZALEZ ZORRILLA, S. A. y a EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, S.A., las prestaciones que a continuación se indican:

*"I. El pago de la cantidad de N\$ [REDACTED] ([REDACTED] nuevos pesos [REDACTED] M. N.), por concepto de daños ocasionados a mi representada, por la falta de cumplimiento de las obligaciones de las demandadas derivadas del contrato de fletamiento celebrado por la empresa Olega, S. A. y Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S. A. que más adelante se describirá, así como de las condiciones pactadas entre mi representada y González Zorrilla, S. A. ---*

*II. La restitución de la cantidad de US\$ [REDACTED] ([REDACTED] dólares [REDACTED] de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, pagados indebidamente por mi representada a González Zorrilla, S. A. en su calidad de agente naviero de Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S. A. ---*

*III. El pago de la cantidad de N\$ [REDACTED] ([REDACTED] nuevos pesos [REDACTED] M. N.), por concepto del perjuicio ocasionado a mi representada por las hoy demandadas. ---*

*IV. El pago de los intereses causados a*



SUPREMA  
JUSTICIA DE  
SECRETARIA I  
LA PRIM



razón del tipo legal sobre las cantidades descritas anteriormente, computados desde que se efectuaron las erogaciones realizadas por mi representada, así como desde que se dejó de percibir la cantidad descrita en el numeral que antecede; hasta que se haga pago liso y llano de todas las prestaciones reclamadas. --- V. La cancelación y consecuente entrega de la Letra de Cambio número [REDACTED] de fecha 3 de enero de 1994, expedida por mi representada a favor de la demandada 'González Zorrilla', S. A., como garantía, misma que ha quedado sin efecto. --- VI. El pago de los gastos y costas que se generen con motivo del presente juicio hasta su total resolución".

La demanda de referencia aparece fundada en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

"Hechos.--- 1. Con fecha 3 de junio de 1993 mi representada celebró contrato de compraventa mercantil, número [REDACTED] con la empresa José María Lazara, S.A., éste último como intermediario comercial de la empresa Olega, S. A., quien es la empresa productor. Hecho que se comprueba con el contrato referido, mismo que al efecto acompaño

como anexo 2. --- 2. El objeto de la compraventa fue la venta de 324 toneladas métricas de Cacahuete Argentino, HPS, tipo runner, calibre 50/60 por onza, cosecha 1993. --- 3. El precio pactado de la compra venta fue determinado en la cantidad de US\$ [REDACTED] ( [REDACTED] dólares de los Estados Unidos de América), por tonelada métrica. Pactándose que el envío del producto se realizaría primeramente empacado en bolsas de yute de aproximadamente 50 Kilogramos cada una, y éstas a su vez se empacarían en contenedores metálicos, mismos que serían prestados por la empresa transportista. --- 4. Dentro del precio estipulado de venta, se incluían los gastos por concepto de flete, esto es, la transportación del producto empacado en los contenedores desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina hasta el puerto de Tampico, Tamaulipas, México, lugar donde la mercancía debía ser entregada y recogida por mi representada o bien por la empresa que se contratara para la transportación terrestre de la mercancía hasta la ciudad de México, D. F., lugar donde tiene su domicilio mi representada. --- Asimismo, se incluía dentro del precio del flete, el préstamo de los contenedores que contenían



SUPREMA  
JUSTICIA D  
SECRETARIA  
LA PRE






la mercancía, desde que partiera el embarque desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina hasta el puerto de Tampico, Tamaulipas, incluyéndose un plazo de 15 días hábiles de préstamo de los contenedores, sin costo alguno para efectos de su transportación a la ciudad de México, D. F. computándose desde el día en que se hiciera entrega de los contenedores con la mercancía en el puerto de destino, hasta una vez devueltos al mismo puerto. --- Para tales efectos la empresa vendedora, Olega, S. A., celebró contrato de fletamento con la negociación 'Empresa Líneas Marítimas Argentinas' S. A. a efecto de que se hiciera cargo tanto de la transportación, como del préstamo de los contenedores. --- 5. La empresa transportista 'Empresa Líneas Marítimas Argentinas' S. A. tiene como agente ~~navegante~~ en México a la empresa 'González Zorrilla', S. A., quién es la ~~empresa~~ encargada directamente de realizar los trámites necesarios en esta país para el ~~desembarque~~ desembarque de las mercancías, para la revalidación de los conocimientos de embarque a fin de autorizar la entrega de las mismas, de las gestiones y trámites necesarios para el préstamo y garantía de contenedores, y en general actúa como

DE  
EN  
LA

mandatario mercantil de la empresa naviera. --- 6. Con la finalidad de transportar la mercancía por vía terrestre del puerto de Tampico, Tamaulipas, lugar convenido de destino de las mercancías a la ciudad de México, D. F. lugar donde tiene su domicilio mi representada, ésta celebró con la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. un contrato verbal, para efectos de que se encargara de los trámites necesarios de importación de la mercancía, solicitar su entrega a la empresa marítima o a su agente naviero, la transportación al domicilio de mi representada; asimismo sería la empresa encargada de recibir la mercancía transportada en los contenedores, así como la devolución de éstos. --- 7. Así las cosas la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. tuvo contacto con la empresa González Zorrilla, S. A. a fin de indicarles que serían ellos quienes transportarían los contenedores que llevaban la mercancía, así como para realizar las negociaciones necesarias para el préstamo y garantía de los contenedores que serían prestados a mi representada para la transportación de la mercancía a la ciudad de México, D. F. --- Sin embargo la empresa demandada González Zorrilla, S. A. indicó



SUPREMA  
JUSTICIA D  
SECRETARIA I  
LA PAIZ



a la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. que no sería aceptada la carta garantía ofrecida por la agencia aduanal a González Zorrilla, para asegurar la reposición de los contenedores en caso de pérdida total o el pago de posibles retrasos en la devolución de los mismos, toda vez que aquella solicitaba una garantía en efectivo, en dólares americanos. Situación que se demuestra con la comunicación de fecha 31 de agosto de 1993 enviada por Roberto Ugarte, S. C. a mi representada por vía de fax, (misma que se anexa a la presente con el número 3, y toda vez que el original obra en poder de la agencia aduanal Roberto Ugarte, solicito a su Señoría requerirle su exhibición), informando a mi representada la necesidad de acudir ante la empresa González Zorrilla, S. A. a fin de establecer las condiciones de garantía por el préstamo de los contenedores, motivo por el cual mi representada acudió a ésta a fin de establecer las condiciones de garantía por el préstamo de los contenedores. --- 8. Una vez que se estableció contacto con la empresa González Zorrilla, S. A., mi representada convino verbalmente con ésta, estipulándose las condiciones del préstamo de los contenedores, indicándole a mi

DE  
UN  
S DE  
LA

*representada que los mismo serían prestados por el término de duración del viaje de la ciudad de Buenos Aires, Argentina a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Así mismo otorgando a mi representada un plazo de 15 días hábiles desde el momento en que se entregaran los contenedores hasta que se hiciera la devolución de éstos. --- Indicando a mi representada que el procedimiento de entrega sería el siguiente: --- a) Al momento de ser enviada la mercancía desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se daría aviso a mi representada de esta situación, por conducto de la empresa José María Lazara, S. A., igualmente se enviarían los conocimientos de embarque respectivos, previamente entregados por la empresa transportista. --- b) El conocimiento de embarque respectivo, mi representada lo debía enviar a su vez a la empresa que transportaría la mercancía del puerto de Tampico, Tamaulipas a la ciudad de México, D. F., (en este caso lo fue la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C.) a fin de que ésta acudiera a las oficinas de González Zorrilla, S. A. en la ciudad de Tampico, Tamaulipas para que fuera realizada la revalidación correspondiente, esto es, la*



SUPREMA  
JUSTICIA D  
SECRETARIA I  
LA PRII





empresa González Zorrilla debía sellar y firmar el conocimiento de embarque. --- c) Una vez revalidado el conocimiento de embarque se debía acudir al Recinto Fiscal correspondiente en el puerto de Tampico, Tamaulipas, lugar donde se guardaría la mercancía, para que se liberaran los contenedores y por ende la mercancía. Se hace ver a su Señoría que sin conocimiento de embarque debidamente revalidado por la empresa transportista o su agente naviero no era posible que el recinto fiscal realizara la entrega. --- d) Una vez entregada la mercancía dentro de los contenedores, empezaban a correr los 15 días de préstamo de éstos, hasta el momento en que se devolvieran en el mismo lugar donde se recogieron. --- 9. En el convenio verbal referido con respecto de la garantía que solicitaba la empresa González Zorrilla, S. A. se convino en entregar a González Zorrilla, S. A. un documento mercantil (letra de cambio) para efectos de garantizar el valor de los contenedores, para el caso de que por causas imputables a mi representada se perdieran éstos. Así mismo garantizarían el pago de cualquier demora en la entrega de los contenedores, por causas imputables a mi representada. --- Se

DE  
IN  
2 DE  
LA

*hace ver a su Señoría que la letra de cambio sería la única garantía otorgada y pactada para los supuestos señalados. --- 10. Con fecha 6 de septiembre de 1993, a efecto de cumplir con la obligación de entrega de la garantía solicitada en el convenio verbal, mi representada entregó a la hoy demandada González Zorrilla, S. A., la letra de cambio [REDACTED] de esa misma fecha, por un importe de N\$ [REDACTED] [REDACTED] nuevos pesos [REDACTED] M. N.), como se comprueba con la carta dirigida a la empresa 'González Zorrilla', S. A., en la que se anexaba el documento mercantil referido, misma que fue acusada de recibo por éstos y que acompaño al presente como anexo 4. --- 11. Como se desprende de la carta mencionada en el hecho inmediato anterior, mi representada se hizo del conocimiento de que contaba con 15 días hábiles de plazo para la devolución de los contenedores a partir de la entrega de la mercancía, situación que había sido convenida verbalmente, como se describió anteriormente. Así mismo se hace ver a su Señoría que dicha comunicación fue acusada de recibo por la demandada González Zorrilla, S. A., confirmándose la entera conformidad de la demandada. ---*



SUPREMA CO  
JUSTICIA DE LA  
NACION  
SECRETARIA DE JUSTICIA  
LA PRIMERA



12. Con fecha 30 de julio de 1993 fueron enviados por la empresa Olega, S. A. en su carácter de cargador, a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México el primero de los cuatro embarques que se debía de realizar por conducto de Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S. A., informándonos esta situación la empresa José María Lazara, S. A., con quién se realizaron los trámites, así como la contratación de compraventa del producto, como lo demuestro con el fax que al efecto acompaño a la presente como anexo 5. Como se desprende del mismo fueron enviados 5 contenedores mismos que a continuación se describen: --- Contenedores números: IKKU 001679/0, ITLU 670462/4, ITLU 824830/7, ICCU 799290/6 y ICCU 798149/7. --- 13. La mercancía y los contenedores, fueron entregados precisamente el día 4 de septiembre de 1993, devolviendo mi representada los contenedores los días 13, 17 y 18 de septiembre de 1993. Esto es, dentro del margen de plazo para su devolución. Como lo demuestro con las comunicaciones de fechas 13, 17 y 22 de septiembre de 1993 enviadas por D. A. Hinojosa, S. C. (a su vez representante de la

agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. en la ciudad de Tampico, Tamaulipas) a González Zorrilla, S. A. dando aviso de la entrega de los contenedores. (Mismas que se anexan a la presente como anexos 6, 7 y 8, en copias de fax, solicitando a su Señoría se le requiera a la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. la exhibición de los originales que obran en su poder, mismas que ya le fueron solicitadas por mi representada, como lo demuestro con la comunicación de fecha 22 de junio de 1994, que se anexa como número 9). -- A efectos de claridad a continuación describo las fechas y los contenedores señalados anteriormente:"

CONTENEDOR NUMERO	FECHA ENTREGA	FECHA DEVOLUCION	FECHA LIMITE
	MERCANCIA	CONTENEDORES	ENTREGA
IKKU 001679-0	4/IX/93	13/IX/93	27/IX/93
ICCU 799290-6	4/IX/93	17/IX/93	27/IX/93
ICCU 798149-7	4/IX/93	17/IX/93	27/IX/93
ITLU 670462-4	4/IX/93	18/IX/93	27/IX/93
ITLU 824830-7	4/IX/93	18/IX/93	27/IX/93

"14. Con fecha 3 de septiembre de 1993, se le dio aviso a mi representada, por vía de fax, que el segundo embarque de los cuatro convenidos salió de la ciudad de Buenos Aires, Argentina con fecha 31 de





28

agosto de 1993. Acompaño a este escrito el fax referido como anexo 10. --- 15. Asimismo en la comunicación descrita anteriormente se le dio aviso a mi representada que la mercancía sería enviada en 5 contenedores describiéndose el número de serie de cada uno de ellos: ICSU 423616/8, ICSU 426538/2, CLCU 228721/0, ICCU 789577/9, IKKU 226952/3. --- 16. De la misma manera que fue convenido en el primer embarque nos fue solicitado por González Zorrilla, S. A. un documento mercantil a fin de garantizar el importe de los contenedores correspondientes al segundo de los cuatro embarques, descritos en el numeral que antecede, así como cualquier demora que se originara posterior a los 15 días hábiles de plazo otorgados para la devolución de los contenedores y para el efecto se envió a dicha empresa una letra de cambio número [REDACTED] de fecha 21 de octubre de 1993, por la cantidad de N\$ [REDACTED] situación que queda debidamente demostrada con la copia de dicha comunicación acusada de recibo por la demandada González Zorrilla, S. A., que al efecto exhibo como anexo 11. Cabe hacer mención que al momento de hacer entrega del documento mercantil referido, y al no existir ningún adeudo

anterior, la demandada González Zorrilla, S. A. procedió a hacer entrega a mi representada de la letra de cambio dada anteriormente en garantía. --- Así mismo se hace ver a su Señoría que en caso que (suponiendo sin conceder) hubiese existido algún adeudo con motivo de los 5 contenedores prestados a mi representada en el primer embarque, la letra de cambio era la garantía para cubrirlo y al momento en que no se requirió a mi representada el pago de cantidad alguna por concepto de demoras, y más aún se procedió a la cancelación y entrega de la letra de cambio dada en garantía, entendiéndose claramente el consentimiento tácito y conformidad de la demandada González Zorrilla, S. A., respecto de la obligación de devolución. --- Al efecto el Código Civil de aplicación supletoria al de Comercio señala en su artículo 1803 que: 'El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo'. --- En el caso que nos ocupa, la empresa González Zorrilla, S. A. realizó la cancelación y devolución de la letra de cambio dada en garantía para el posible retraso en la entrega de los



SUPLENTE A CORT  
JUSTICIA FEDERAL  
SECRETARIA DE AGUAS  
LA PAZ, MICH.



21

contenedores o la pérdida total de los mismos. Esta cancelación y devolución de la letra de cambio dada en garantía indudablemente es un acto que presupone a toda luz que no existía adeudo alguno derivado del préstamo de los contenedores, toda vez que si la letra de cambio era la garantía, al ser liberada ésta, era liberado cualquier adeudo, si es que hubiese existido.

--- 17. La mercancía contenida en los contenedores prestados para el segundo de los embarques, descritos anteriormente, fue entregada a la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C., por conducto de su filial D. A. Hinojosa, S. C. precisamente el día 13 de octubre de 1993, devolviendo mi representada los contenedores los días 4, 9 y 10 de noviembre de 1993. Esto es, dentro del plazo convenido para su devolución. Como lo demuestro con las comunicaciones de fechas 4, 9 y 10 de noviembre de 1993 enviada a González Zorrilla, S. A. dando aviso de la entrega de los contenedores. Comunicaciones que se exhiben como anexos 13 y 14, en copias de fax, solicitando a su Señoría se le requiera a la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. la exhibición de los originales que obran en su poder, mismas que ya le fueron solicitadas por mi representada, como lo demuestro con la

comunicación de fecha 22 de junio de 1994, descrita anteriormente. --- A efectos de claridad a continuación describo las fechas y los contenedores señalados anteriormente:"

	FECHA	FECHA	FECHA
CONTENEDOR	ENTREGA	DEVOLUCION	LIMITE
NUMERO	MERCANCIA	CONTENEDORES	ENTREGA
ICSU 426538-2	13/X/93	4/XI/93	10/XI/93
ICCU 789577-9	13/X/93	4/XI/93	10/XI/93
IKKU 226952-3	13/X/93	9/XI/93	10/XI/93
CLOU 228721-0	13/X/93	10/XI/93	10/XI/93
ICSU 423610-8	13/X/93	10/XI/93	10/XI/93

"18. Como se demuestra con el fax enviado por José María Lazara, S. A. Cerezo, S. A., con fecha 23 de septiembre de 1993, mismo que se exhibe a la presente como anexo 15, aquella le dio aviso a ésta que con fecha 22 de septiembre de 1993, se envió el tercer embarque conteniendo parte de la mercancía objeto de la compraventa encontrándose en 5 contenedores, que a continuación se describen: GSTU 328759/0, GSTU 429517/9, GSTU 500084/2, XTRU 857125/6, GSTU 329107/6. --- 19. Con fecha 18 de octubre de 1993, la empresa José María Lazara, S. A. envió fax a mi representada, mismo que se exhibe como anexo 16, dando aviso que el







cuarto y último embarque había sido enviado a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México con fecha 14 de septiembre de 1993. Desprendiéndose del mismo tres contenedores en los que se enviaba la mercancía: ITLU 671095/1, IKKU 239237/4, IEAU 215382/5. --- 20. Tal y como se había realizado anteriormente en el primer y segundo embarque, al momento de llegar tanto el tercero como el cuarto embarque a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México, la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C. acudió a las oficinas de la empresa González Zorrilla, S. A., en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a fin de que les fuera revalidado el conocimiento de embarque respectivo, autorizando así al recinto fiscal al retirar la mercancía correspondiente al tercer y cuarto embarques enviados, para así proceder a la transportación terrestre de los mismos a la empresa Cerezo, S. A. en esta ciudad. Sin embargo al momento de que la agencia Aduanal acudió a recoger la mercancía, empleados de la empresa demandada González Zorrilla, S. A. alegaron que no podían hacer entrega de los 8 contenedores descritos, ni de la mercancía, fundándose para ello en el hecho que existían ciertos

DE  
1.003  
-3.003  
-1.003

adeudos por concepto de unos supuestos retrasos en la entrega de los contenedores prestados para la transportación del primer embarque. --- Situación por demás ilegal, ya que como se desprende del artículo 174 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, si el consignatario rehusare recibir las mercancías, el porteador podrá depositarlas en lugar seguro por cuenta del cargador o si se hubiese expedido conocimiento, por cuenta del titular del mismo. En el presente caso sí se expidió el conocimiento establecido y descrito por el artículo 168 de la misma Ley invocada. Sin embargo, en momento alguno el poseedor del conocimiento, que era la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C., se negó a recibir las mercancías, sino por el contrario solicitó su entrega, siendo que la que se negó a realizar la entrega, lo fueron las empresas demandadas, a pesar que no le asistía legalmente ningún derecho. --- De lo que se desprende que las empresas demandadas actuaron de manera ilegal negándose a revalidar el conocimiento respectivo, contravenido así las disposiciones legales relativas. --- 21. La situación descrita anteriormente fue notificada a mi representada por la agencia aduanal,

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUPLENTE  
JUSTICIA  
SECRETARIO  
LA PI



manifestándole que la empresa González Zorrilla, S. A., no daría la revalidación correspondiente, esto es no liberaría la mercancía, hasta en tanto fuera pagado en su totalidad el supuesto adeudo, derivado de los retrasos alegados por ésta. --- Al momento de dar aviso a mi representada de esta situación, ésta tuvo conversación telefónica con el señor Carlos Quijano, representante de González Zorrilla, S. A. a fin de que explicara el motivo de los supuestos adeudos, desconociendo mi representada por completo el por qué de los mismos ya que si había sido devuelta la letra de cambio de fecha 6 de septiembre de 1993, dada en garantía por cualquier adeudo generado por el retraso de la entrega de los contenedores del primer embarque, esto es, existía la conformidad por parte de la empresa González Zorrilla, S. A. de que no existía adeudo alguno. Inclusive mi representada entregó a la empresa González Zorrilla, S.A. otra letra de cambio para garantizar el cumplimiento en la entrega de los contenedores prestados en el segundo embarque, de los que se derivaba que nos existía alguna irregularidad. --- 22. A pesar de que en reiteradas ocasiones mi representada, acudió a las oficinas de la

empresa González Zorrilla, S. A. a fin de que diera la orden a su sucursal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, de liberar los contenedores a la agencia aduanal Roberto Ugarte, y por ende del producto que contenían los mismos del tercer y cuarto embarques, producto indispensables para la producción de la empresa actora, estas gestiones resultaron infructuosas ya que González Zorrilla, S. A. se negó a hacer entrega de los contenedores, hasta en tanto no se les liquidara la totalidad del supuesto adeudo que se había generado, al grado que el señor Carlos Quijano manifestó que 'no me importa si su producto se echa a perder o lo sacan a remate los del almacén, pero a mi me pagan o no les entrego nada y además los voy a demandar con la letra que tengo'. --- En virtud de la negativa de las hoy demandadas de hacer entrega de los contenedores a mi representada, ésta bajo protesta y a fin de evitar se le siguieran causando mayores daños y perjuicios, optó por realizar el pago del supuesto adeudo, para lo cuál la empresa González Zorrilla, S. A. envió las facturas [REDACTED] y [REDACTED] fechadas el 6 de octubre de 1993, (mismas que anexo a la presente como números 17, 18 y 19), por las cantidades de US\$ [REDACTED]







US\$ [REDACTED] US\$ [REDACTED] respectivamente. De las mismas se desprende que existió un supuesto retraso que a efectos de claridad describo a continuación:"

FACTURA [REDACTED]

CONTENEDOR

IKKU 001679/8

MONTO

DOLARES AMERICANOS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

MONTO

DOLARES AMERICANOS

FACTURA [REDACTED]

CONTENEDOR

ICCU 759290/6

ICCU 788149/7

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

MONTO

DOLARES AMERICANOS

FACTURA [REDACTED]

CONTENEDOR

ITLU 678492/4

ITLU 824830/7

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

S

"De las facturas transcritas, así como del fax de fecha 30 de julio de 1993, enviado a Cerezo, S. A. de C. V. por la empresa José María Lazara, S. A., como de

la carta de fecha 6 de septiembre de 1993, expedida por mi representada y acusada de recibido por la demandada González Zorrilla, s. A., así como del conocimiento número [REDACTED] (mismo que exhibo como anexo 20, en copia fotostática, solicitando a su Señoría requiera a la demandada González Zorrilla, S. A. a presentar el original del mismo, que obra en su poder) expedido por la propia línea marítima, se desprende que el contenedor número ICCU 788149-7 no fue prestado en momento alguno a mi representada, motivo por el cuál, y suponiendo sin conceder, que hubiesen existido atrasos en la devolución de los contenedores, estos retrasos exclusivamente serían por los demás contenedores, que si fueron prestados a mi representada, pero jamás en el contenedor número ICCU 788149-7, que no fue prestado a mi representada por la empresa naviera. Motivo por el cuál es aún más improcedente el cobro de la factura número [REDACTED]. Desprendiéndose el lucro indebido de la demandada González Zorrilla, S. A. en perjuicio de mi representada. --- Abundando, que es de explorado derecho la improcedencia de imponer penas unilaterales, no pactadas. Ya que si bien existía una garantía para el supuesto de que





se retrasare la entrega de los contenedores, no existía un pacto entre la cantidad que le correspondería a cada día de retraso. Sin embargo las demandas dispusieron la cantidad, contraviniendo de esta manera la ley. --- Así mismo se desprende claramente de la factura número [REDACTED] que el supuesto adeudo lo es por US\$ [REDACTED] más IVA, situación que resulta imposible, ya que si se realiza la operación matemática respectiva, tiene un resultado ilógico, ya que si la cantidad descrita es dividida entre dos (por ser dos los contenedores a los que se refiere la factura), y el resultado a su vez se divide entre US\$ [REDACTED] que es el precio determinado por las demandas por día de atraso, nos da un resultado de 8.002 días, esto es que la demandada pretende hacer creer que existieron 8.002 días de retraso por contenedor, situación por demás falsa e imposible, ya que es imposible que hayan días con fracciones. --- Aunado a lo anterior, se hace ver a Su Señoría, que en el supuesto sin conceder, que hubiese existido retraso, la empresa González Zorrilla, S. A. omite en sus facturas por completo señalar los días de supuesto atraso. --- 23. Aún así y bajo protesta mi representada, al realizar el pago correspondiente solicitó a la empresa González Zorrilla, S. A., dieran la

DE  
IN.  
DE  
LA

orden para hacer entrega de los contenedores, con el producto contenido en ellos, a lo que la empresa González Zorrilla, S. A., manifestó que existía otro supuesto adeudo por retraso de los contenedores prestados con motivo del segundo embarque enviado. A lo que nuevamente se opuso mi representada ya que los contenedores correspondientes al segundo embarque habían sido devueltos dentro del plazo de 15 días hábiles otorgados. Aunado, que existía una letra de cambio dada en garantía, que era precisamente para garantizar cualquier retraso y jamás se estipuló que la garantía lo sería la propia mercancía y mucho menos su ilegal retención. Y en el supuesto que hubiese habido efectivamente retrasos se debió ejercer la vía legal correspondiente con la letra de cambio dada en garantía, y no reteniendo los contenedores y la mercancía y haciéndose justicia por su propia mano. --- 24. Mi representada a fin de evitar la posible pérdida del producto materia de la compraventa descrita, bajo protesta realizó pago de la factura número [REDACTED] (misma que exhibo como anexo 21), a efecto de que se liberaran los contenedores que se tenían detenidos por órdenes de las hoy demandadas. Asimismo de la factura se



SUPREMA  
JUSTICIA DE  
SECRETARIA DE  
LA PRIME.



3A

desprende la relación de los contenedores,  
mismos que a efecto de claridad describo:"

FACTURA

TENEDOR

ICSU 423646/8

IKKU 226052/3

ICSU 423653/8

CLOU 228721/0

ICCU 789577/9

MONTO

DOLARES AMERICANOS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

"Los contenedores números  
ICSU423646/8, IKKU 226052/3, ICSU  
423653/8, en momento alguno fueron  
prestados a mi representada para la  
transportación del producto, situación que  
se comprueba primeramente con el fax de  
fecha 3 de septiembre de 1993, en el cual se  
le envió a mi representada la relación de los  
contenedores que transportarían la carga,  
así mismo es comprobable con la carta  
Escrita por mi representada de fecha 21 de  
octubre de 1993, documento en los que  
igualmente se hacía una relación de los  
contenedores y se enviaba garantía a la  
demandada González Zorrilla, S. A., carta  
que fue debidamente recibida por ésta; así



mismo es comprobable con el conocimiento número [REDACTED] expedido por la propia línea marítima transportista y que exhibo como anexo 22. --- Así las cosas, en el supuesto que [REDACTED] hubiese existido algún adeudo derivado de los contenedores exclusivamente operaría por los números CLOU 228721/0 Y ICCU 789577/9 y no por los números ICSU 423646/8, IKKU 226052/3, ICSU 423653/8, ya que estos últimos no fueron prestados a mi representada, de donde se derivan el lucro indebido que en perjuicio de mi representada realizó la hoy demandada González Zorrilla, S. A. --- 25. Al realizar el pago de la factura número [REDACTED] descrita con anterioridad, se dio la orden el día 3 de enero de 1994 de liberar los contenedores detenidos por parte de las demandadas, previa la entrega que realizara mi representada de la letra de cambio número [REDACTED] de esa misma fecha, por la cantidad de N\$ [REDACTED] para garantizar retrasos o pérdida de los contenedores referentes al tercer y cuarto embarque, para lo cuál fue enviada la letra de cambio referida, misma que a la fecha sigue en poder de González Zorrilla, S. A. Sin embargo se hace ver a su Señoría que las actitudes tomada por las demandadas en la retención de los



SUPREMA  
JUSTICIA DE  
SECRETARIA DE  
LA PRIMA



contenedores y la mercancía son del todo arbitrarias y contrarias a la ley, ya que no se adecúan de conformidad con el artículo 174 de la ley de Navegación y Comercio Marítimos ya que este otorga el derecho al porteador de depositar las mercancías transportadas si el consignatario se rehusare a recibirlas, sin embargo en momento alguno ni mi representada, ni la agencia aduanal Roberto Ugarte, se negaron a recibir la mercancía, sino por el contrario la solicitaron. --- Asimismo la situación descrita es contraria al artículo 179 del mismo ordenamiento, ya que este ordena que el porteador deberá poner las cosas transportadas a disposición del consignatario o del titular del conocimiento, en el lugar y términos pactados o usuales. Sin embargo en el caso que nos ocupa, como lo he manifestado la agencia aduanal Roberto Ugarte, S. C., era el portador del conocimiento y los términos pactados y usados anteriormente entre las partes en los primeros dos embarques, lo fueron la entrega de los contenedores, sin ninguna reserva para no hacerlo, además de que legalmente no es posible hacer la retención de las mercancías propiedad de mi representada, situación por la cual las empresas demandadas son las causantes de

los daños y perjuicios ocasionados a mi representada, ya que en reiteradas ocasiones se negaron a efectuar la revalidación de los conocimientos de embarque respectivos. Aunado que existía la letra de cambio dada en garantía y no podían retenerse los contenedores; ya que si realmente hubiese existido algún adeudo se debió optar por la vía correspondiente y con la letra de cambio y no con la retención de la mercancía (aún y que suponiendo si hubiesen existido adeudos) haciéndose con esto justicia por su propia mano, no obstante que el artículo 17 Constitucional ordena que: 'Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer la violencia para reclamar su derecho'. Así mismo el artículo 14 Constitucional señala en su segundo párrafo que: 'Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos...'. De similar manera el artículo 16 señala 'Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente...'. --- De los preceptos invocados como de las manifestaciones vertidas se desprende que las empresas



SUPREMA C  
JUSTICIA DE I  
SECRETARÍA DE J  
LA PRIME



demandadas actuaron por completo de manera ilegal e inconstitucional, privando unilateralmente a mi representada de obtener las mercancías que eran de su propiedad, sin que hubiese un mandamiento o resolución judicial y menos aún alguna disposición legal que les otorgara el derecho de retener las mercancías propiedad de mi representada. Motivo por el cuál se les debe de condenar al pago de las prestaciones reclamadas. --- Así mismo es aplicable al presente caso lo dispuesto por el Código de Comercio en su artículo 596 fracción I, mismo que ordena: 'El consignatario tiene derecho: I. A que mientras sea el tenedor de la carta de porte (en este caso el conocimiento) expedida a su favor se le entreguen las mercancías, cualesquiera que sean las órdenes que en contrario diere el cargador con posterioridad'. Más aún es improcedente el hecho que si la ley prohíbe por cualquier caso que el cargador retenga la entrega de la mercancía, más aún lo es para el porteador, que actúa por orden del cargador. --- De igual manera el artículo 590 fracción I del Código de Comercio señala la obligación del porteador de entregar las mercancías al tenedor de la carta de porte (conocimiento en este caso). --

- En este orden de ideas las empresas

*demandadas carecían de todo derecho legal de retener los contenedores y las mercancías propiedad de mi representada, ya que el único caso que prevé la Ley para ello, lo es el derivado del artículo 591 fracción VII del Código de Comercio, que señala que el porteador tendrá el derecho de retener la carga transportada, mientras no se le pague el porte (flete). En primer lugar el flete se encontraba pagado, aunado que si hubiese existido adeudo, éste correspondería al primer y segundo embarque; nunca al tercero y cuarto que fueron de los que se detuvieron y se negaron a entregar. Abundando si hubiesen existido adeudos, derivados del primer y segundo embarque, estaban garantizados con los documentos mercantiles dados en garantía, mismos que no se hicieron valer, sino por el contrario se devolvieron a mi representada, entonces es por demás improcedente el hecho de que González Zorrilla, S. A. supusiera adeudos con tantos días después de haber sido devueltos los contenedores. Así mismo es improcedente que González Zorrilla, S. A. cobrara retrasos por contenedores que jamás prestó a mi representada. --- De todo lo anterior se deriva la mala fe, el dolo y el engaño con que se conducen las empresas demandadas, ya que al verse presionada mi*







representada con la posible pérdida del producto comprado y que ya había sido pagado, se vio en la necesidad de ceder a las presiones de pago ejercidas por las demandadas. -- 26. Así las cosas y en virtud de la negativa de entrega de los contenedores por las demandadas, mi representada tuvo que pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cantidad de N\$ [REDACTED]

[REDACTED] nuevos pesos m. n.), por concepto de almacenaje por uso de las Instalaciones Portuarias del Recinto Fiscal, Puertos Mexicanos, oficina en Tampico, Tamaulipas, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 166 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, ésta le otorga la facultad al capitán del buque de ordenar, si el puerto que de destino como es el caso, la descarga y depósito de los efectos transportados. Situación que así se hizo, pero manifestando a su Señoría que no fue por causas imputables a mi representada, sino por órdenes expresas de las empresas demandadas, y por lo mismo por causas imputables a éstas, además de ser ilegales, Situación que se demuestra con las declaraciones de pago de derechos, mismas que se acompañan a la presente como



SECRETARÍA DE  
HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO  
CASA DE MONEDA

anexos 23, 24 y 25. --- Se hace ver a su Señoría que existía el riesgo de perder la mercancía ya que al transcurrir el plazo de 60 días de almacenaje del producto la oficina descrita procede a poner en remate las mercancías almacenadas, motivo por el cual mi representada se vio en la imperiosa necesidad de realizar las erogaciones correspondientes, situación que conocía González Zorrilla, S. A., ya que como lo describí en el hecho número 22, el señor Carlos Quijano representante de ésta había amenazado a mi representada de que dejaría que se rematara la mercancía si no se les pagaban los supuestos adeudos. ---

27. Los contenedores correspondientes al tercer y cuarto embarque fueron devueltos con fechas 25 y 27 de enero de 1994. --- 28. Una vez devueltos los contenedores por mi representada a González Zorrilla, S. A., se le solicitó a estos hicieran entrega de la letra de cambio dada en garantía, así como se le requirió del pago de las erogaciones que había sufrido mi representada por el incumplimiento de la demandada, a lo que con fecha 14 de abril de 1994, González Zorrilla, S. A. envió un fax a mi representada (mismo que se acompaña como anexo 26, manifestando a su Señoría que el original del documento obra en poder de la





38

demandada González Zorrilla, S. A. y solicito se le requiera de su entrega) por medio del cual le informaba que existían demoras que se generaron en las entregas de los contenedores del tercer y cuarto embarque, y se debían liquidar las facturas número [REDACTED] y [REDACTED] por el monto de US\$ [REDACTED] y US\$ [REDACTED] respectivamente, facturas de las que no se tenía conocimiento alguno ya que nunca fueron enviadas a mi representada a lo que mi representada se negó a pagar por que no fue la causante de las demoras generadas, ya que la negativa en la entrega de los contenedores fue por parte de las demandadas, existía un incumplimiento previo de éstas, a pesar de haberseles requerido constantemente la entrega de los contenedores y por ende de la mercancía. Lo que es comprobable con el comunicado enviado a mi representada con fecha 18 de abril de 1994 (que se acompaña como anexo 27), en la que anexaron copias de las referidas facturas, así mismo las facturas [REDACTED] y [REDACTED] se encuentran fechadas el 24 de febrero de 1994, siendo que la demandada González Zorrilla, S. A. por su comunicado de 14 de abril de 1994 manifestó que esas facturas ya existían, situación que era desconocida por mi representada ya que no

DE  
CON.  
FEB 24  
1994

habían sido enviadas con anterioridad. ---  
Se hace ver a su Señoría que de la comunicación de fecha 18 de abril de 1994 se desprende la confesión expresa de la demandada González Zorrilla, S. A. en el sentido de que manifiesta haber retenido las mercancías correspondientes al tercer y cuarto embarque descritos hasta en tanto no se le liquidaron los supuestos adeudos generados por las demoras en la devolución de los contenedores. --- 29. A pesar de que mi representada en reiteradas ocasiones le solicitó a González Zorrilla, S. A. la entrega de la letra de cambio dada en garantía, ésta se ha negado a hacerlo amenazando a mi representada con poner en circulación el documentos mercantil descrito si no se realizaba el pago de las cantidades amparadas en las facturas ■■■ y ■■■ Situación que es por demás ilegal, ya que el artículo 596 del Código de Comercio otorga el derecho y el artículo 577 del mismo Código la obligación, al consignatario, que los anticipos que haya hecho con motivo de la entrega de la carga se le reintegrarán desde luego sin esperar a que se cubran con su precio. Aunado que el documento mercantil, del cual se pide su devolución, se dio como garantía y no como anticipo, garantía que ha quedado extinta, razones



SUPREM  
JUSTICIA  
SECRETARÍ  
LA PR



por demás lógicas y jurídicamente válidas, para que se condene a la hoy demandada a la entrega del documento que tienen en su poder. --- 30. Al haber incumplido con su obligación de entrega las empresas demandadas, el producto comprado y correspondiente al tercer y cuarto embarque fue entregado a mi representada hasta el día 3 de enero de 1994, siendo que se debió entregar en los meses de noviembre y diciembre de 1993, ya que el cacahuete era indispensable para que a su vez mi representada lo vendiera en el mes de diciembre de 1993 a la empresa 'Chocolates Napoli', S. A. de C. V. situación que conocía la demandada González Zorrilla, S. A. de C. V. y que además fue imposible realizar debido a la negativa de las empresas demandadas de hacer entrega de esta mercancía. --- En efecto con fecha 20 de octubre de 1993 la empresa 'Chocolates Napoli', S. A. de C. V. realizó el pedido número [REDACTED] a mi representada para que ésta la vendiera 70,000 kilogramos de Cacahuete HPS, tipo runner, calibre 50/60, pactándose un precio por la cantidad de N\$ [REDACTED] por kilogramo. (situación que se comprueba con la orden de pedido número [REDACTED] que acompaño como anexo 28). --- Debido a la negativa de entrega de las



mercancías retenidas ilegalmente por las demandadas, no fue posible realizar el pedido solicitado al que mi representada se había obligado a realizar, lo que ocasionó que no fuera posible la venta de los 70,000 kilogramos de cacahuete, por la cantidad de N\$ [REDACTED] ([REDACTED] nuevos pesos [REDACTED] m.n.), generando una pérdida de ganancias a mi representada por la cantidad de N\$ [REDACTED] ([REDACTED] nuevos pesos [REDACTED], cantidad que es un perjuicio en detrimento de mi representada ocasionado por las demandadas. --- 31.- De todo lo anteriormente manifestado, así como de los documentos que al efecto se exhiben a la presente, se desprende claramente que las empresas demandadas sin ningún derecho cobraron indebidamente cantidades de dinero a mi representada, obligándola a realizar pagos por adeudos que jamás existieron, además teniendo que pagar mi representada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cantidad de N\$ [REDACTED] por almacenaje de los contenedores y la mercancía, por causas imputables totalmente a las demandadas. Además y suponiendo sin conceder que los adeudos que reclamaba González Zorrilla, S. A. hubiesen existido nadie puede hacerse justicia por su propia mano', además que la



SUPLEN  
JUSTICIA  
SECRETARÍA  
LA F



retención de la mercancía no era la vía adecuada, ni legal, ya que con estos procedimientos legales, así como de su negligencia inexcusable, lo único que logró fue causar a mi representada daños y perjuicios. Virtud por la cual su Señoría deberá condenar a las demandadas al pago de todas y cada una de las prestaciones que se reclaman. --- 32. --- Toda vez que han resultado infructuosas las gestiones extrajudiciales realizadas por mi representada con la finalidad de que sea devuelto el documento mercantil, así como le sean pagadas las erogaciones y las pérdidas de las ganancias que dejó de percibir mi representada por el incumplimiento de las obligaciones de las hoy demandadas, es necesario acudir ante su Señoría a demandar en esta vía las prestaciones que han quedado descritas en el cuerpo de la presente. --- DERECHO. ---

Fundan la presente demanda lo dispuesto por los artículos 157, 159, 165, 166, 168, 174, 179, 182 y demás relativos y aplicables de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (se hace ver a su Señoría que la ley invocada se encuentra derogada, como se desprende del Diario Oficial de fecha 4 de enero de 1994, sin embargo es aplicable al caso en concreto, ya que fue la ley aplicable

*al momento de presentarse los hechos narrados). --- Así mismo es aplicable al caso lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como los artículos 576, 577, 590, 591, 596 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio. --- Fundan el procedimiento lo dispuesto por los artículos 1377 a 1390 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio".*

**SEGUNDO.-** Con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal dictó el siguiente auto admisorio de la demanda:

*"México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro.- Con el escrito de cuenta y anexos que se acompañan, fórmese expediente y regístrese. Con fundamento en los artículos 1377 y 1378 y demás aplicables del Código de Comercio así como las demás disposiciones legales invocadas, se tiene a CEREZO, S.A. DE C.V. por conducto de su representante legal demandando en la vía ordinaria mercantil de GONZALEZ ZORRILLA, S.A. y EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, S.A., ambas por conducto de su Representante Legal, las prestaciones que indica, en tal virtud con*

*del Sr. Esteban*  
SUPR!  
JUSTIC  
SECRET  
LA

A



las copias simples exhibidas córrase traslado y emplácese a dicho demandado para (sic) que en el término de NUEVE DIAS produzca su contestación. Notifíquese, lo proveyó y firma la C. Juez Tercero Civil. Day fe.

En relación con el plazo para que se diera contestación a la demanda de referencia, por parte de la codemandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., en su oportunidad la Secretaría del Juzgado formuló la certificación correspondiente, misma que corre agregada a fojas treinta del cuaderno principal, y de acuerdo a la cual, el referido término de nueve días para que procediera a dar contestación a la demanda, corrió del día veinticinco de agosto al seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.



A CT DE  
DE LA J  
DE ACUERDOS DE  
1994

**TERCERO.** Mediante escrito presentado en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Federal el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Ignacio Luis Melo Ruiz en su carácter de Apoderado Legal de GONZALEZ ZORRILLA, S.A., promovió incompetencia por declinatoria, en los términos del escrito que en su parte conducente se transcribe:

**"INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA"** -- La demanda y la acción que en ella se ejercita se fundan en la



*existencia de un contrato de transporte marítimo o fletamento, supuestamente celebrado por la empresa Olega, S. A. y Líneas Marítimas Argentinas, S. A. teniendo como destinatario de la mercancía a la actora. En efecto, en el No. I del capítulo de prestaciones se dice que el concepto de la demanda es por daños ocasionados por falta de cumplimiento del contrato de fletamento. --- En los hechos 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y 25 se habla insistentemente de contratos de transporte marítimo de Buenos Aires a Tampico y de los conocimientos de embarque que amparaban dichos embarques. --- En el capítulo de Derecho, la parte actora funda su demanda en diversos artículos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, por lo que es evidente que en el presente caso se está frente a una controversia propia del Derecho Marítimo. --- El artículo 104 fracción I de la Constitución establece con claridad meridiana y sin lugar a dudas que corresponde exclusivamente a los Tribunales Federales conocer de toda controversia derivada del Derecho Marítimo, como en el presente caso. --- El artículo 3o. de la Ley de Navegación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 fracción II de la Constitución establece*



SUPREMA  
JUSTICIA D  
SECRETARIA I  
LA PRI





A2

también sin lugar a dudas que: ---

'CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES  
FEDERALES CONOCER DE LAS  
CONTROVERSIAS, actos de jurisdicción  
voluntaria y procedimientos especiales o de  
ejecución en asuntos relacionados con las  
vías generales de comunicación por agua, la  
navegación Y EL COMERCIO MARITIMO

... De las anteriores disposiciones se  
llega a la necesaria conclusión de que la  
materia y controversias derivadas del  
Comercio Marítimo es de exclusivo  
conocimiento de los tribunales Federales y  
que en este caso no existe jurisdicción  
concurrente, por lo que la Señoría no es  
competente para conocer del presente  
negocio y debe declararlo así y enviar el  
presente expediente a los Tribunales  
Federales del Distrito Federal para que  
continúen conociendo de la presente  
controversia. --- El anterior criterio ha sido  
confirmado por el H. Tribunal Superior de  
Justicia del Distrito Federal en las  
ejecutorias dictadas en los dos Tocas Civiles  
que en fotocopia acompaño a este escrito y  
que en obvio de repeticiones hago mios los  
argumentos de los seis Magistrados del  
Honorable Tribunal Superior de Justicia  
que han sostenido ese criterio. --- En mérito  
de lo expuesto, A USTED C. JUEZ,

E DE  
TON.  
COS DE  
: 1.12

PODER

JUDICIAL DE LA

LA

atentamente suplico se sirva: --- I. Tenerme por presentado en tiempo y forma promoviendo incompetencia por declinatoria en razón a la materia en el presente juicio y reconocerme la personalidad con que me ostento. --- II. Dar entrada al presente Incidente de Incompetencia y proceder a su substanciación. --- III. Correr traslado con la copia del escrito que anexo a mi contraparte para que en el término de tres días exponga lo que ha su derecho convenga. --- IV. Dar vista al ministerio Público para los efectos legales a que haya lugar. --- V. En su oportunidad y previos los trámites legales del caso, declarar que su Señoría es incompetente para conocer del presente negocio y enviar los autos a los Juzgados de Distrito para que continúen conociendo del mismo. --- VI. Tener por reservados mis derechos para contestar la presente demanda dentro del término señalado por su Señoría ad cautelam y sin perjuicio de la acción competencial planteada. --- VII. Tener por autorizadas a las personas que se indican en el proemio de este escrito para oír y recibir notificaciones".

Asimismo mediante diverso escrito presentado en el mencionado Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Federal del





de septiembre siguiente el ya citado IGNACIO LUIS MELO RUIZ en su caracter de Apoderado de GONZALEZ ZORRILLA, S.A., contestó ad cautelam la demanda entablada en su contra, en términos del escrito que corre agregado a fojas de 44 a la 68 del cuaderno principal.

En relación con la incompetencia por declinatoria planteada por el apoderado legal de GONZALEZ ZORRILLA, S.A., el aludido Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal dictó el siguiente proveído:

"México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.- A sus autos el escrito de Ignacio Luis Melo Ruiz, a quien se le tiene por reconocida su personalidad en términos del testimonio que exhibe, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos y autorizadas a las personas que señala para los mismos efectos y con fundamento en los artículos 1096, 1097 y 1102 se le tiene promoviendo INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA y con la misma dese vista por tres días a su Contraria para que manifieste lo que a su derecho compete al Ministerio Público adscrito a este Juzgado, ordenándose la suspensión del procedimiento hasta en tanto no se dirima dicha incompetencia.- Notifiquese" (Sic.)."



COPIA DE  
LA SENTENCIA  
ACORDADA EN  
LA SALA

PODER JUDICIAL LA

FEDERACION

Asimismo, y en relación con la indicada contestación a la demanda, con fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se emitió un proveído por medio del cual se mandó reservar para su Acuerdo el ocurso de contestación de la demanda de referencia, una vez que fuese resuelta la incompetencia planteada por la propia demandada.

Con respecto a la vista que se le mandó dar a la parte actora con la incompetencia por declinatoria planteada por su contraparte, Joaquín Jiménez-Labora, en representación de CEREZO, S.A., presentó un escrito el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, según el sello de presentación respectivo, dirigido al Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal, en el cual expone lo que a continuación se transcribe:

*"Por medio del presente escrito vengo a desahogar la vista ordenada por su Señoría por auto de fecha 8 de septiembre del año en curso con respecto a la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la codemandada González Zorrilla, S. A., misma que resulta del todo improcedente, en base a los siguientes razonamientos: --- 1. Resulta falso e incongruente el sentido que pretende dar la codemandada González Zorrilla, S. A., a sus afirmaciones vertidas, ya que la misma manifiesta que en el escrito de demanda, específicamente de los hechos 3, 4, 8, 12, 13,*







A4

15, 17, 20 y 25, que él mismo cita, se habla 'insistentemente de contratos de transporte marítimo'. Asimismo señala el hecho de que 'la parte actora funda su demanda en diversos artículos de la Ley de Navegación'.

--- A) Primeramente, los hechos narrados en la demanda, específicamente los señalados anteriormente, han sido narrados, como antecedentes a las acciones ilegales en las que incurrieron las demandadas, acciones que derivaron los daños y perjuicios que ocasionaron a mi representada posteriormente mismos que se han reclamado y especificado en el respectivo apartado de prestaciones; sin embargo, el fondo del presente asunto, esto es, la presente litis, no se encuentra encaminada a resolver una controversia del derecho marítimo, ya que mi representada nunca celebró el contrato de fletamiento al que tanto alude mi contraparte. El hecho es que mi representada era simplemente la destinataria de dicho contrato de fletamiento, pero nunca fue parte Contratante del mismo y sólo estaba obligada a recibir la mercancía que sería enviada de la ciudad de Buenos Aires, Argentina al puerto de Tampico, México. --- Por otra parte, Cerezo, S. A. de C. V., por su cuenta celebró con la empresa González

SECRETARÍA DE  
JUSTICIA  
DE LA  
FEDERACIÓN  
DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DISTRITO FEDERAL

PODERES



*Zorrilla, S. A. un contrato verbal para el préstamo de diversos contenedores que contenían la mercancía, mismos que serían utilizados una vez que fueran desembarcados del buque que los transportaba, para que hecho que fuera, mi representada los transportara por vía terrestre hasta su domicilio. De lo que se infiere de la simple lógica-jurídica, que la entrega de la mercancía en un puerto, en calidad de destinatario, así como el préstamo de los contenedores que mantenía la mercancía, no son, ni pueden ser materia del comercio marítimo y por tanto la materia de la presente litis, no corresponde de ningún modo al derecho marítimo. --- Concluyendo, si bien en el escrito de demanda se narran hechos, que fundan la acción intentada, que se refieren a contratos de fletamiento marítimo y conocimientos de embarque, no menos cierto resulta que en momento alguno se está demandando, verbigracia, el cumplimiento o rescisión del citado contrato de fletamiento, sino que con la narración de esos hechos se pretende demostrar la ilegalidad en la que incurrieron las demandadas, al retener sin ningún derecho la mercancía que debía ser entregada a mi representada, para así quedar debidamente probados los daños y*





los perjuicios que se ocasionaron a mi representada, pero en momento alguno se pretende que su Señoría resuelva, un asunto que corresponda a la materia del derecho marítimo, ya que el fondo del presente juicio corresponde a la materia del derecho mercantil. --- b) Por otra parte, si bien como lo afirma la demandada, la actora funda su demanda en diversos artículos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, lo es tendiente a demostrar la inobservancia y falta de cumplimiento de los mismos por parte de las demandas, inobservancia que ocasionó diversos daños y perjuicios a mi representada, y son estos los que se combaten en el presente juicio. Dichos artículos efectivamente fundan la demanda pero no de una manera absoluta, ya que también se invocan artículos del Código de Comercio y de la propia Constitución. Se pretende, ~~empero~~, con dichos artículos demostrar que los hechos narrados en la demanda son ciertos y al quedar demostrados éstos, se podrán encuadrar con la norma jurídica en la que se funda la demanda. Si tomáramos en cuenta las afirmaciones de la demandada, que por el simple hecho de que una acción se funde en parte en inobservancias de la Ley que derivaron hechos de estudio de otra

DE  
10/11/95  
12:12

PODER JUDICIAL DE

LA

materia, sería como imaginar la aberración de que el conductor de cierto vehículo por inobservancia del reglamento de tránsito omite hacer alto a la luz roja de un semáforo, y traiga como consecuencia el homicidio imprudencial de un transeúnte que cruzaba la calle, debiendo, entonces de resolver el juez calificador de una delegación política, en lugar de un juez penal, en virtud de que el hecho deriva de una infracción de tránsito, específicamente de la inobservancia del reglamento de tránsito. --- 2. Aunado a lo anterior resulta inaplicable el artículo 3o. de la Ley de Navegación que invoca mi contraparte, y resulta inaplicable, primeramente porque el mismo artículo señala 'corresponde a los Tribunales Federales conocer de las controversias, actos de jurisdicción voluntaria y procedimientos especiales o de ejecución en asuntos relacionados con las vías de comunicación por agua, la navegación y el comercio marítimo...', sin embargo y aunado a lo que anteriormente he expuesto y que solicito se tenga por reproducido, la presente controversia es tendiente a demostrar los actos ilícitos que se le imputan a las demandadas y que ocasionan daños y perjuicios a mi representada, pero en momento alguno la





No

litis se refiere: --- a) A las vías de comunicación por agua, ni se relaciona con ellas y si así lo fuere sería procedente la aplicación del criterio jurisprudencial dictado por la Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal, que al efecto cito: ---

**VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. COMPETENCIA JURISDICCION CONCURRENTE.**

(Se transcribe). --- b) A la navegación. De la simple lectura de la demanda planteada se desprende que a pesar de que los hechos imputados a las demandadas derivan de embarques marítimos, no son estos los que constituyen el fondo del asunto, ya que la navegación refiere a la actividad que realiza una determinada embarcación de un punto a otro, con un fin determinado, actividad que no es parte de la litis planteada. --- c) Al comercio marítimo. La demandada pretende hacer creer a su Señoría que las relaciones que unieron a mi representada con las demandadas lo fueron de la materia del Derecho Marítimo, invocando para ese efecto, el artículo 3o. de la Ley de Navegación vigente, mismo que señala que las controversias en asuntos relacionados con el Comercio Marítimo serán de competencia de los Tribunales Federales. Así mismo la demandada admite



*expresamente que la materia del presente juicio es derivada del Comercio Marítimo. Situación que pudiese parecerlo así, sin embargo, la propia Ley de Navegación, define al Comercio Marítimo en su artículo 2o. y al efecto señala: 'Comercio Marítimo: La adquisición, operación y exportación de embarcaciones con objeto de transportar por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el medio acuático una actividad de exploración, explotación o captura de recursos naturales, construcción o recreación'. --- Del precepto anterior se infiere que de ninguna manera el préstamo de contenedores, así como la recepción de la mercancía por parte del destinatario, se pueden refutar como actos del comercio marítimo, ya que no son 'adquisiciones, operaciones y exportaciones de embarcaciones'. --- De todo lo antes manifestado, así como del estudio y lectura de la demanda, se concluye que la presente litis no es, ni puede ser una controversia derivada de las vías generales de comunicación por agua, la navegación, o el comercio marítimo, por lo que resulta inaplicable el artículo 3o. de la Ley de Navegación en que se funda mi contraparte. --- 3. Asimismo carece de aplicación la fracción II del artículo 104 de la*







A2

Constitución Federal, ya que dicho precepto señala que corresponde a los Tribunales de la federación conocer de todas las controversias que versen sobre derecho marítimo, sin embargo la presente controversia no versa o trata sobre derecho marítimo, sino que es una controversia exclusiva del derecho mercantil (daños y perjuicios y restitución de pago y garantía), cuya competencia es de jueces del orden común. Pero en momento alguno la presente controversia versa sobre derecho mercantil, en su caso y suponiendo, deriva (pero no versa) del derecho marítimo por ser situaciones anteriores y antecesoras a las que se reclaman en la demanda, tendientes a demostrar la inobservancia de la ley por las demandadas, inobservancias que generaron daños y perjuicios a mi representada. Aunado a lo anterior, en la presente controversia no se afecta en momento alguno el interés general, sino exclusivamente intereses particulares, no teniendo necesidad de conocer de ella, por ende, los tribunales federales de nuestro País. Siendo aplicable por analogía jurídica el criterio adoptado por nuestro Máximo Órgano Jurisprudencial, transcrito anteriormente, mismo que solicito se tenga por reproducido como si a la letra se



PODER

LA

insertase. --- 4. Del mismo modo resulta del todo improcedente el hecho que la demandada González Zorrilla, S. A., pretenda que su Señoría tome en consideración sentencias de segunda instancia relativas a incompetencias, ya que en primer lugar es de explorado derecho que la única costumbre e interpretación legal, que tiene carácter de obligatoria lo sean aquellas sentencias que sean emitidas por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y por los Tribunales Colegiados de Circuito; en el mismo sentido y sin ninguna resolución en contrario, a las cuales se les denomina jurisprudencia. Sin embargo, fuera de estos órganos jurisprudenciales, no deberá de tener valor dentro de otro procedimiento sentencias dictadas por otros tribunales, ya que no nos encontramos en nuestro país dentro de un régimen de derecho consuetudinario, como lo es el anglosajón, y por ende las sentencias dictadas por otros órganos no facultados expresamente por la ley, no crearán ningún antecedente que pueda ser invocado, como lo pretende mi contraparte. --- Aunado a lo anterior, resulta imposible saber el criterio de los magistrados a los que alude la demandada, ya que no exhibe en momento alguno las copias fotostáticas de las

ESTADOS UNIDOS  
SUPR  
JUSTIC  
SECRET  
L A



sentencias en las que tanto se basa. --- Por todo lo anteriormente expuesto es de concluir que su Señoría es competente para conocer del presente asunto, toda vez que el mismo pertenece al derecho mercantil y no al derecho marítimo, como lo ha pretendido hacer creer débilmente la demandada González Zorrilla, S. A. En consecuencia solicito de su Señoría declarar improcedente la incompetencia planteada por mi contraparte".

En relación con lo anterior en el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Federal se dictó el siguiente proveído:

"México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. A sus autos el escrito de la actora mediante el cual se le tiene desahogando la vista que se le dio con la excepción de incompetencia, para todos los efectos legales a que haya lugar; desahogando la vista que se le dio a la representación social federal, se proveerá lo conducente.- Notifíquese; lo proveyó y firma la C. Juez. Doy fe

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
FEDERACIÓN

Por su parte la Agente del Ministerio Público Federal adscrita al Juzgado Civil de referencia, en escrito presentado el diez de octubre del referido año de mil novecientos noventa y



cuatro, hizo los siguientes señalamientos en relación a la vista que se le mandó dar:

*"La C. Agente del Ministerio Público Adscrita en desahogo de auto 8 de septiembre de 1994, publicado en el Boletín Judicial No. 43, correspondiente al día 13 de septiembre de 1994, expediente que me fue turnado en fecha 3 de octubre de 1994, manifiesta que: --- Previo el estudio de las constancias de autos y escrito de contestación de la parte demandada, donde se promueve la excepción de incompetencia, y que de tales actuaciones no se desprende que se lesionen intereses de la Federación, la suscrita es, de la opinión de que su Señoría sí tiene competencia para seguir conociendo del presente juicio. --- Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 1102 del Código de Comercio y 104, fracción I, de nuestra Carta Magna, además 2o. y 5o. de la Ley Orgánica, 19, fracciones II, III, IV y V del Reglamento, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal".*

A lo anterior recayó el siguiente proveído:

*"México, Distrito Federal, a seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- Agréguese a sus autos el escrito de*





cuenta de la C. Agente del Ministerio Público Adscrita a este Tribunal y con las manifestaciones a que alude, dese vista con las mismas a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.- Notifíquese. Lo proveyo y firma la C. Juez.- Doy fe"

CUARTO.- El día siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal, en relación con la incompetencia planteada por la demandada CEREZO, S.A. DE C.V., emitió la siguiente resolución interlocutoria:

México, Distrito Federal, a siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. --- VISTOS, para resolver interlocutoriamente, la Excepción de Incompetencia por Declinatoria, en los Autos del Juicio Ordinario Mercantil, promovida por CEREZO, S.A. DE C.V. en contra de GONZALEZ ZORRILLA, S.A. Y EMPRESAS LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, S.A., expediente 1349/94,

RESULTANDOS: --- 1.- Mediante escrito de treinta de agosto de mil novecientos noventa y cuatro el C. IGNACIO LUIS MELO RUIZ en su carácter de apoderado legal de la codemandada GONZALEZ ZORRILLA SOCIEDAD



C. RTE DE  
J. J. J. J. J.  
J. J. J. J. J.  
J. J. J. J. J.

LA



*ANONIMA* promovió la excepción de *INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA* para lo cual argumentó el Incidentista que: La demanda y la acción que en ella se ejercitaba se fundaba en la existencia de un contrato de transporte marítimo o fletamento, que habían celebrado empresa *Olega, S. A. y Líneas Marítimas Argentinas, S. A.* teniendo como destinatario de la mercancía la actora. Y que el motivo de la demanda era por concepto de daños ocasionados por falta de cumplimiento del contrato fletamento, además de que los contratos de Transporte marítimo era de Buenos Aires a Tampico y de los conocimientos de embarque que amparaban dichos embarques, además de que en el capítulo de derecho, la parte actora fundaba su demanda en diversos artículos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, por lo que era evidente que en el caso de este juicio se estaba ante una controversia de Derecho Marítimo; y que el artículo 104 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecía que correspondía exclusivamente a los Tribunales Federales conocer de toda controversia derivada del Derecho Marítimo, y que además el artículo 3o. de la Ley de Navegación establecía que: -





Correspondía a los Tribunales Federales conocer de las controversias ... de ejecución en asuntos relacionados con las vías generales de comunicación por agua, la navegación y el comercio Marítimo.. --- 2.- Admitida a trámite la excepción de incompetencia por declinatoria, se mandó dar vista a la actora para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera, quien en tiempo la desahogó, manifestando que debería de declararse improcedente la excepción en estudio, teniendo por reproducidos sus argumentos, como si se insertaran a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar; así mismo se dio vista a la C. Agente del Ministerio Público, adscrito a este H. Juzgado para que manifestara lo que a su derecho o representación conviniera misma que desahogó en fecha cuatro de octubre del año en curso, manifestando que de las constancias de autos y escrito de contestación de la parte demandada, se desprendía que no se lesionaban intereses de la Federación, y por lo tanto la suscrita juzgadora tenía competencia para que siguiera conociendo sobre el juicio de referencia, por lo que por proveído 'de treinta y uno de octubre del año en curso' se ordenó turnar los autos a la vista de la

suscrita Juez, para el efecto de dictar la resolución que en derecho correspondiera, respecto de la excepción de Incompetencia por declinatoria, misma que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes; --- C O N S I D E R A N D O S: I. Como consta en autos la parte demandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A. por conducto de su apoderado promovió Incompetencia por declinatoria argumentando que con fundamento en el artículo 104 fracción II de la Constitución establecía que en concreto el asunto de que se trata, correspondía conocer a los Tribunales Federales, además de lo que establecía el artículo 3o. de la Ley de Navegación, motivo por el cual la suscrita es de la opinión de que toda vez que el artículo 104 mencionado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponden a los Tribunales de la Federación conocer de TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE VERSEN SOBRE EL DERECHO MARITIMO, y toda vez que la presente controversia es o se trata de una controversia de Derecho Mercantil, la competencia versará sobre los Jueces de Orden Común, como es el caso de la suscrita, así mismo el mencionado artículo 104 en su fracción I estipula que conocerán de la Federación (Tribunales de la





Federación) de las controversias que SOLO AFECTEN Intereses de la Federación, así mismo establece que cuando existen controversias que sólo afectan intereses particulares, podrán conocer los Tribunales Federales, a elección de actor, los Jueces y Tribunales del Orden Común de los Estados y del Distrito Federal, por lo tanto si en el presente caso el actor eligió un Juzgado del Fuero Común está conforme a derecho ello, con fundamenta en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo anteriormente expuesto deberá de declararse improcedente la excepción de Incompetencia planteada por el apoderado de la codemandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., y en consecuencia de lo anterior deberá continuarse con el procedimiento. Por lo expuesto y además en atención a lo establecido por los artículos 1323, 1324, 1325 del Código de Comercio. Por lo que es de resolverse y se: **RESUELVE: PRIMERO.-** Se declara improcedente la excepción de **INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA** planteada por el C. IGNACIO LUIS MELO RUIZ en su carácter de apoderado legal de la codemandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A. --- **SEGUNDO.-** CONTINUESE CON EL PROCEDIMIENTO. --- **TERCERO.-**

SECRETARÍA DE  
JUSTICIA  
ACUERDOS DE  
MEXICO SALA



*NOTIFIQUESE.*

--- Así,  
interlocutoriamente juzgando, lo resolvió y  
firma la C. Juez Tercero de lo Civil, Lic.  
Ma. del Socorro Vega Zepeda, quien actúa  
en unión de la Secretaria de Acuerdos que  
autoriza y da fe".

Contra la anterior interlocutoria Ignacio Luis Melo Ruiz apoderado de la demandada interpuso el recurso de apelación, mismo que fue admitido en ambos efectos por el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal mediante auto de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. A virtud de lo cual con fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, en el Toca de Apelación número 4389/94, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió su resolución, declarando fundado el Recurso de Apelación y por tanto **revocó la sentencia interlocutoria de siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro**, para los efectos y fines precisados en el segundo párrafo del considerando cuarto de dicha resolución, mismo que reza como sigue:

*"En mérito de lo expuesto,  
deberá de revocarse la sentencia  
interlocutoria recurrida, puesto al no  
haberse declarado incompetente la inferior  
para conocer del juicio, cuando el  
conocimiento de dicho asunto correspondía  
a los Tribunales Federales, causa a la  
recurrente los agravios que se han  
declarado procedentes en esta instancia, por*







lo que los puntos resolutive en la sentencia recurrida deberán quedar en los siguientes términos: -- PRIMERO.- Ha sido

procedente la exepción de incompetencia planteada por la demandada;

SEGUNDO.- Remítanse los presentes autos al C. Juez de Distrito en Materia Civil que por turno corresponda a fin de que se avoque al conocimiento de la controversia; -- TERCERO.-

Notifiquese".

La parte considerativa de la referida sentencia interlocutoria, reza como sigue:

El primer agravio que se hace valer por la recurrente resulta fundado, en virtud de que del escrito inicial de demanda se aprecia que CEREZO, S. A. DE C. V. demanda de GONZALEZ ZORRILLA, S. A. el pago de los daños y perjuicios que le fueron ocasionados con motivo de la falta de cumplimiento de las obligaciones de las demandadas derivadas del contrato de fletamiento celebrado por la empresa Olega, S. A. y Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S. A., así como las condiciones pactadas por la actora con GONZALEZ ZORRILLA, S. A., ahora bien,

ORTE DE  
LA NA. ION.  
ACUERDOS DE  
LA IALA

debe hacerse notar que la relación que une a las partes se deriva del contrato de Fletamiento antes mencionada, aún cuando este se hubiere celebrado únicamente entre la parte demandada y la empresa Olega, S. A., puesto que dicho contrato fue celebrado para dar cumplimiento al contrato de compraventa mercantil número [REDACTED] por la actora con la empresa JOSE MARIA LAZARA, S. A., como intermediaria comercial de OLEGA, S. A., por lo que los efectos del contrato de fletamiento antes citado es extensible a la relación que une a la actora con las demandadas y por tanto resulta aplicable al caso las disposiciones del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, en relación con las normas de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, toda vez que en el contrato de compraventa antes mencionado se estableció que la mercancía materia del mismo se transportaría desde la ciudad de Buenos Aires Argentina al Puerto de Tampico Tamaulipas, lugar en donde la mercancía debía de ser entregada y recogida por la actora, habiéndose transportado dicha mercancía por vía marítima y por conducto de la empresa demandada, en consecuencia resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento

ESTADOS UNIDOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
SECRETARÍA DE LA FAL



53

mencionado en cuanto establece que dicho reglamento se aplicará en todo lo relativo al movimiento de mercancías en transporte multimodal internacional, a los puertos marítimos y terrestres nacionales, terminales interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que podrán hacerse maniobras para su carga y descarga en función de las obras e instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con este tipo de transporte y regulará la actividad del operador de transporte multimodal internacional. --- Por otro lado, habiendo quedado establecido que la relación que une a las partes se deriva del contrato de fletamiento celebrado entre la Empresa Olega, S. A. y Empresas Líneas Marítimas Argentinas, S. A., partiendo de la premisa de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, resulta igualmente aplicable al caso el artículo 10 del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional que establece: El operador de transporte multimodal internacional es responsable de las mercancías o bienes desde el momento en que este o cualquiera de sus representantes o agentes reciban la mercancía del usuario o de sus representantes hasta el momento de la entrega de la misma al destinatario, en los

SECRETARÍA DE  
JUSTICIA  
CORTES DE  
LA NACIÓN  
E ACUERDOS DE  
LA SALA

términos que fijen las leyes aplicables a cada modo de transporte. En consecuencia, el operador de transporte multimodal internacional responderá por: a).- La pérdida total o parcial de las mercancías o bienes; b).- De los daños o averías experimentadas a los mismos; c).- De la demora en su entrega'. Es indudable que las normas que se aplicarán al caso en controversia serán las de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual en su artículo 1, establece que: 'Serán objeto de esta ley: la navegación marítima-portuaria y sus maniobras conexas; las empresas navieras; los buques, los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo'. --- II.- El segundo agravio que se hace valer resulta fundado en efecto, si bien es cierto que la fracción I, del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la jurisdicción concurrente cuando en la aplicación de leyes o de los Tratados Internacionales sólo se afecten intereses particulares, debe establecerse que este supuesto no surte en el presente caso, toda vez que al haberse hecho uso de la vía marítima para la transportación de las mercancías materia del contrato precisado en el considerando que antecede, resulta aplicable lo dispuesto

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FALSA  
LA PAZ



A

por el artículo 3, de la Ley de Vías Generales de Comunicación que establece: 'Las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales...' ahora bien, el artículo 1, de la misma ley contempla como vía general de comunicación a los mares territoriales, por lo que queda de manifiesto que la controversia debe de ser conocida por los Tribunales Federales, atento a lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación que a la letra dice: 'Corresponderá a los tribunales federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fueren parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o contra la explotación de las vías, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas o que estén bajo su responsabilidad'. --- III.- El tercer agravio resulta igualmente fundado, toda vez, que efectivamente, aun cuando claramente la Ley de Navegación y Comercio Marítimos no establece que las

CCJ 2 DE  
LA 17 DE  
E ENERO DE 95  
AEREA SALA



*controversias que resulten en la aplicación de dicha ley deban ser conocidas por los tribunales federales, debe hacerse notar que atento a los artículos 3o. y 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación ya citados son competentes los tribunales federales para conocer de la controversia en cuestión.*

*--- IV.- El cuarto agravio resulta inatendible en virtud de que el mismo, no es propiamente un agravio, ya que la recurrente se limita a establecer el criterio sustentado por diversa Sala de este mismo Tribunal, en un caso similar, y al no referirse concretamente a la resolución motivo de la instancia, su agravio resulta inatendible".*

**QUINTO.-** Con fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, emitió la siguiente resolución:

*"Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual remite los autos originales del expediente número 1349/94, promovido por CEREZO. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE en contra de GONZALEZ*





55

ZORRILLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Y EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, SOCIEDAD ANONIMA, así como documentos base de la acción, en virtud de que la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante resolución del diecinueve de abril del año en curso, fincó la competencia para conocer de la demanda de que se trata de un Juzgado de Distrito en Materia Civil y respecto del mismo, se provee: --- Con el oficio de cuenta y anexos acompañando al mismo, fórmese expediente y regístrese en el número 128/95. Guárdese en el seguro del Juzgado los documentos base de la acción. --- Con fundamento en los artículos 104, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la suscrita no acepta la competencia que le pretende fincar la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. --- En efecto, la Sala antes citada, pretende fincar competencia a la suscrita argumentando primordialmente que la relación que une a las partes deriva del contrato de fletamiento celebrado entre la empresa Olega Sociedad Anónima y empresas Líneas Marítimas

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
CUARTA SALA

*Argentinas, Sociedad Anónima, resultando por ello aplicable al reglamento para el Transporte Multimodal Internacional y lo dispuesto por los artículos 3° y 5° de la Ley General de Vías Generales de Comunicación. --- El argumento de que se trata, resulta insuficiente para fincar a la suscrita la competencia de que se trata, en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que cuando las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre la aplicación o cumplimiento de leyes federales o de tratados internacionales y dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. --- En el caso, la parte actora al tratarse de una controversia entre particulares determinó presentar su demanda ante los tribunales del Distrito Federal, fincando de tal manera la competencia en el fuero común. --- Sin que sea válido el argumento de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUPLENTE  
JUSTICIA  
LA PA



*Distrito Federal, en el sentido de que el artículo 5° de la Ley de Vías Generales de Comunicación, finca la competencia a los juzgados federales, cuando intervenga una empresa de vías generales de comunicación, debido a que dicha disposición no puede estar por encima de la disposición constitucional, resultando por ello que la competencia de que se trata, la fincó la parte actora a favor del fuero común, en virtud de haber presentado su demanda ante dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial visible en la página 120, Cuarta Parte, Volumen 163-168, 7° Epoca, Tercera Sala del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: 'VIAS GENERALES DE COMUNICACION. COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL.- Tratándose de un juicio civil seguido en contra de una línea que presta servicio de transporte en un camino federal, con sujeción a la concesión relativa que le fue otorgada, tal circunstancia no es bastante para desentenderse del régimen Competencial establecido en la Constitución, puesto que el artículo 5° de la Ley de Vías Generales de Comunicación no puede prevalecer sobre los artículos 104 y 124 constitucionales, los cuales sólo reservan a los tribunales federales aquellas*



CCT DE  
CLAYTON  
DE ASESORES DE  
ABRA LALON

*controversias que se susciten sobre aplicación de leyes federales. Aún en el supuesto de que la litis planteada en un asunto debiera resolverse conforme a las leyes de carácter federal, el caso quedaría comprendido en la segunda parte de la fracción I del precitado artículo 104, la cual dispone que en cuanto dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán decidirse, a elección del actor, por los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Por tanto, aún en ese supuesto, debe observarse la distribución de competencias establecidas por dicho precepto constitucional, resolviendo que es competente para conocer del juicio natural el juez elegido por el actor al promover el juicio'. --- En este orden de ideas, y dado que la suscrita no acepta la competencia que le pretendió fincar la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítase el presente expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida sobre la competencia controvertida. Fórmese cuadernillo de antecedentes. --- Se tiene señalado como domicilio de las partes el que obra en los presente autos y por designados para tales*

ESTADOS  
SUP  
JUS  
REC  
LA PA





57

*efectos a las personas que se señalan. ---  
Notifíquese personalmente".*

**SEXTO.-** Recibidos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los autos originales del expediente 128/95, formado con motivo de la demanda promovida por CEREZO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en contra de GONZALEZ ZORRILLA, SOCIEDAD ANONIMA Y/O EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, SOCIEDAD ANONIMA, a virtud de la competencia materia del presente Toca número 128/95 que se suscita entre el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y el Juez Tercero de lo Civil (del fuero común) del Distrito Federal, con fecha ocho de enero del presente año de mil novecientos noventa y seis, se dictó el siguiente Auto por el Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal:

*"México, Distrito Federal, ocho  
de enero de mil novecientos noventa y seis. -  
-- Con el oficio número 12228 de fecha siete  
de noviembre de mil novecientos noventa y  
cinco, signado por la Juez Primero de  
Distrito en Materia Civil, con residencia en  
la Ciudad de México, Distrito Federal, con  
los anexos que acompaña: fórmese y  
regístrese el expediente relativo a la cuestión  
de competencia suscitada entre la citada  
juzgadora y la Juez Tercero de los Civil,  
residente en la Ciudad de México, Distrito  
Federal, para conocer del juicio ordinario  
mercantil número 1349/94, seguido por*

DOS MESES  
CORTES DE  
E LA N. N.  
DE ACUERDO DE  
MESA 3444

*Joaquín Jiménez-Labora, en su carácter de representante de Cerezo, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de González Zorrilla, Sociedad Anónima y Empresa Líneas Marítimas Argentinas, Sociedad Anónima. Acútese recibo. --- Con relación a la competencia por declinatoria número 128/95, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, planteada dentro del juicio ordinario mercantil número 1349/94, en los autos respectivos obran las constancias siguientes: --- a) Joaquín Jiménez-Labora, representante legal de Cerezo, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante escrito exhibido el primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro, promovió juicio ordinario mercantil en contra de González Zorrilla, Sociedad Anónima y Empresa Líneas Marítimas Argentinas, Sociedad Anónima, cuya demanda se radicó ante el Juzgado Tercero de lo Civil en el Distrito Federal, formándose el expediente registrado con el número 1349/94. --- b) La empresa demandada González Zorrilla, Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal, en escrito presentado el día treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, promovió cuestión competencial por declinatoria ante*





el Juez Tercero de lo Civil, dentro del juicio ordinario mercantil número 1349/94. --- c) La Juez Tercero de lo Civil, de conformidad con los argumentos jurídicos precisados en proveído de siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por Ignacio Luis Melo Ruiz, en su carácter de apoderado de la codemandada González Zorrilla, Sociedad Anónima. --- d) Ignacio Luis Melo Ruiz, mediante escrito de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, interpuso a nombre de su representada, recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria dictada por la Juez Tercero de lo Civil el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. --- e) La Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, residente en la Ciudad de México, en el toca de apelación número 4389/94, resolvió el diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, revocar la sentencia interlocutoria pronunciada por la Juez Tercero de lo Civil, el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en razón de que el conocimiento del asunto corresponde a los tribunales federales. --- f) La Juez Primero de Distrito en Materia Civil, a quien se



NOTA DE  
LA 1ª UN.  
ACTOS DE  
LA SALA

turnó el asunto de referencia, no acepta en los términos de sus argumentación jurídica hecha valer en proveído de siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, la competencia que le pretende fincar la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, por cuyo motivo ordena remitir el expediente número 128/95 a este alto Tribunal, para que decida sobre la competencia controvertida. --- Ahora bien, considerando que en la especie se ventila un conflicto competencial entre los jueces referidos en el párrafo primero del presente acuerdo, para conocer del juicio ordinario mercantil número 1349/94 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, es de estimarse que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. --- Por ende, con fundamento en los artículos 35, párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos civiles y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica citada, córrase traslado al Ministerio Público Federal, para que dentro del término de cinco días manifieste lo que a su representación convenga, con la prevención que de no hacerlo así, se le recogerán de oficio los autos, cumplido lo anterior, tórnese el asunto al Ministro JUAN M. SILVA MEZA, a fin de que

ESTADO UNIDO  
SUP.  
JUS.  
-SECI  
LA



*elabore el proyecto de resolución respectivo.*

*--- Notifíquese".*

El Agente del Ministerio Público Federal, en su Pedimento número VI-21/96, emitió la propuesta de que se declarara competente a la Juez Tercero de lo Civil en el Distrito.

En proveído de fecha veintinueve de enero de mil novecientos noventa y seis se turnaron los autos del presente asunto al Señor Ministro Juan M. Silva Meza para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

### CONSIDERANDO

**PRIMERO.-** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer el conflicto competencial que se plantea, con fundamento en los artículos 106 de la Constitución Federal, 21, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, por suscitarse dicho Conflicto entre un Juez de Distrito en Materia Civil y un Juez de lo Civil del Fuero Común del Distrito Federal.

En relación con la precedente consideración, se estima pertinente hacer los siguientes señalamientos:

Ciertamente que la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal en su anterior integración, al resolver la **Competencia Civil No. 109/91**, suscitada entre los Jueces Vigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal y Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, el veintitrés de septiembre de mil

SECRETARÍA DE JUSTICIA  
CCTM DE  
LA  
4884



novecientos noventa y uno, por unanimidad de cuatro votos, emitió el criterio que dio lugar a la Tesis 3ª. CLXXII/91, consultable en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava Época, Tomo VIII-Diciembre, página 53, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

*"PLENO DE LA SUPREMA CORTE. A EL CORRESPONDE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL CONFLICTO COMPETENCIAL SUSCITADO ENTRE UN JUEZ FEDERAL Y UNO LOCAL ESPECIALIZADOS EN MATERIA CIVIL, QUE REQUIERE PARA SU RESOLUCION DETERMINAR SI LA CONTROVERSIA EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO EN QUE SE PRESENTA VERSA SOBRE DERECHO MARITIMO O SE REFIERE SOLO A LA MATERIA MERCANTIL.- En el supuesto de referencia resulta necesario determinar lo que se entiende jurídicamente por derecho marítimo y para ello deben interpretarse los artículos 73, fracción XIII, y 104, fracción I, Constitucionales, que establecen la competencia federal en la materia de derecho marítimo, a fin de poderse establecer si la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que regula la hipoteca*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SUPLENTE  
JUSTICIA  
SECA  
LA PA



60

marítima, es de derecho marítimo o es solo un ordenamiento administrativo que regula la navegación y los problemas inherentes a ellas, es decir, relativa a la rama del derecho mercantil, en cuyo caso se estaría frente a una competencia concurrente si se afectaran sólo los intereses particulares, según lo previsto por la fracción I del artículo 104 citado. Por tanto, la competencia para resolver el conflicto competencial corresponde al Pleno de la Suprema Corte pues el sentido de las reformas de 1988 en el régimen de competencias es el de que sea dicho Pleno el que conozca de los problemas de constitucionalidad y de interpretación de los preceptos de la Constitución. Además, conforme a lo dispuesto por los artículos 106 Constitucional y IV, fracción XV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, corresponde a este Poder, en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o entre los de un Estado y los de otro, y compete al Pleno de la Suprema Corte conocer de cualquier asunto de la competencia de la Suprema Corte cuyo conocimiento no corresponda a las Salas de

MEXICANO  
CORTES DE  
LA J. N.  
DE JUICIOS DE  
MERA SALA

*la misma, por disposición expresa de la ley. Por tanto, es competente el Pleno para conocer del conflicto competencial que se suscite entre un Juez Federal y uno local, ambos especializados en materia civil, cuando para resolverse se requiera determinar si la controversia en el juicio especial hipotecario en que se presenta dicho conflicto, versa sobre derecho marítimo o se refiere exclusivamente a la materia mercantil, pues en tal supuesto no se da la hipótesis prevista por la fracción VI del artículo 26 de la Ley Orgánica citada, relativa a la competencia de la Tercera Sala para conocer de las controversias que se susciten en materia civil entre los tribunales de la Federación y los de las entidades federativas, o entre los tribunales de dos o más entidades federativas. Estimar lo contrario implicaría prejuzgar que la controversia en el juicio relativo versa sobre materia mercantil, cuando que ello es precisamente la cuestión que debe ser examinada para resolver el conflicto competencial".*

Sin embargo, con relación al mismo asunto, o sea <sup>en la</sup> citada Competencia Civil No. 109/91, posteriormente con fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres, el

SUPR  
JUST  
L.A.



61

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, determinó lo que sigue:

*"PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, carece de competencia legal para conocer del asunto a que este expediente se refiere. --- SEGUNDO.- Remítanse los autos a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales procedentes".*

Las consideraciones en que se sustentó la anterior determinación, fueron las siguientes:

*"CONSIDERANDO: --- UNICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia legal para resolver el conflicto competencial suscitado entre la Juez Vigésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal y la Juez Segundo de Distrito, en Materia Civil en el Distrito Federal, para conocer del juicio especial Hipotecario número 251/88, promovido por Banco Exterior de España, Sociedad Anónima, en contra de Compañía Internacional de Pesca, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre el primero de los órganos mencionados, debiéndose devolver a*

COORTE DE  
LA NACIÓN  
SACRIFICOS DE  
LEBA BALA

la Tercera Sala de este Alto Tribunal para su resolución. --- Ciertamente, de las constancias relatadas en los resultandos precedentes, se advierte de manera relevante que en el presente caso el conflicto competencial se presente entre un juez del fuero común y un juez federal, ambos especializados en materia civil, para no conocer de un juicio especial hipotecario, sosteniendo el primero su incompetencia por considerar que la controversia versa sobre derecho marítimo, y el segundo por estimar que al no referirse a esta materia y no ser parte la Federación en el juicio y afectarse bienes de propiedad federal existe competencia concurrente, correspondiendo al juez local el conocimiento el asunto por así haberlo elegido la parte actora al presentarse ante aquél su demanda. --- Por tanto, en la especie resulta claro que el conflicto competencial se suscita entre jueces especializados en materia civil, uno del fuero común y el otro de la Federación, y que el problema gira en torno a la interpretación de preceptos constitucionales (73, fracción XIII y 104, fracción II), que establecen la competencia federal en la materia de derecho marítimo, en la medida en que debe determinarse si la Ley de

SUPLENTE  
JUSTICIA  
SECRETARIA DE  
LA PAZ





62

Navegación y Comercio Marítimo corresponde al derecho marítimo o es un ordenamiento de carácter administrativo, que regula la navegación y los problemas inherentes a ella, en relación con los particulares y de éstos con el Estado; o finalmente, si únicamente regula cuestiones comerciales entre aquellos sujetos que realizan actividades marítimas, para concluir que es un conjunto de disposiciones relativas al derecho mercantil. --- Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracciones I, inciso a) y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene facultades, entre otras cosas, para conocer del recurso de revisión en amparos contra sentencias pronunciadas en audiencia constitucional por los jueces de distrito en materia civil y en contra de las sentencias dictadas en esa misma materia en amparo directo, entre otros casos cuando en la resolución respectiva se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución en materia civil. --- El citado precepto en la conducente dice: --- 'Art. 26.- Corresponde conocer a la Tercera Sala: --- I.- Del recurso de revisión en amparo contra

102 11 12  
LA 11 11 N.  
ACORDOS DE  
ERA SALA

*sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito: ---*

*a) Cuando subsista en el recurso el problema de constitucionalidad, si en la demanda de amparo se hubiere impugnado un reglamento federal en materia civil expedido por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de la Constitución, o un reglamento en materia civil expedido por el gobernador de un Estado, por estimarlo directamente violatorio de un precepto de la Constitución, o si en la sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución en materia civil; y...'*

*--- II.- Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo en materia civil pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de un reglamento federal en materia civil expedido por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I el artículo 89 de la Constitución, o de un reglamento en materia civil expedido por el gobernador de un Estado; o cuando en la sentencia se establezca la interpretación de un precepto de la Constitución en materia civil...'* --- A su vez, la fracción VI del

SUPLENTE  
JUS. I  
SECRETARÍA  
LA



mismo precepto 26 dispone: 'Corresponde conocer a la Tercera Sala: --- ...VI. De las controversias que se susciten en materia civil, de los tribunales de la Federación y los de las entidades federativas, o entre los tribunales de dos o más entidades federativas;...' --- Tomando en cuenta el contenido de los preceptos transcritos, se llega a la conclusión de que el asunto es de la competencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resulta claro que en la especie dos tribunales en materia civil se ~~con~~gagan a conocer de un mismo asunto en esa materia; que si bien, según se precisó con anterioridad se hace necesario establecer la interpretación de dos preceptos constitucionales para determinar la naturaleza jurídica de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, es decir, si corresponde propiamente al derecho marítimo a que alude al artículo 73, fracción XIII constitucional, o se trata de una rama genérica del derecho mercantil, tal cuestión no priva de competencia a la Sala Civil por disposición expresa del artículo 26 transcrito, pues según quedó establecido dicho órgano tiene amplias facultades para realizar dicho examen, es

OS ME...  
A C  
DE L  
LA ES...  
BIBLIOTECA

*decir, para decidir sobre la interpretación directa de un precepto constitucional, si bien en amparos en revisión, por mayoría de razón puede hacerlo en la solución de un conflicto competencial. --- Por otra parte, debe decirse que no escapa a la atención de este órgano colegiado la complejidad de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ya que su capitulado contiene disposiciones de carácter administrativo, laboral, penal, mercantil y civil. Sin embargo, ese sólo hecho no es razón suficiente para que el asunto sea de la competencia exclusiva de este Alto Tribunal, toda vez que no es el único caso de leyes complejas, ya que como esta existen muchas que tratando de regular un materia inciden en otras ramas del derecho, y no por ello es competencia del Tribunal Pleno, pues para que se surta su competencia se requiere que se someta a discusión la definición de todos los aspectos de determinada rama del derecho, en el caso concreto, del derecho marítimo, y no simplemente resolver si un problema hipotecario es de la competencia del Pleno, pues no es está planteando en el caso un conflicto de naturaleza laboral ni penal, ni cualquiera otro en las diversas materias que contiene la mencionada legislación, sino*

ESTADOS UNIDOS  
SUPLENTE  
JUS  
SECT. 113  
L. 1



4

exclusivamente a la materia civil. --- Finalmente, debe destacarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 1/88 de fecha diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y ocho, si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ocuparse fundamentalmente de cuestiones estrictamente constitucionales, es decir, se reserva al Tribunal Pleno como máximo intérprete del estudio de la constitucionalidad de leyes pero no todo tema de constitucionalidad, ya que del problema relativo a interpretación directa de un precepto de la Constitución, deben conocer las Salas en sus diversas materias; de ahí que estas sean las competentes para resolver los problemas inherentes a la interpretación directa de las normas constitucionales en cualquier tipo de controversias. --- En tal virtud, deben remitirse los autos a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien se estima legalmente competente para resolver del asunto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación".

COPIA  
DE LA SENTENCIA  
DE ACUERDO DE  
TERCERA SALA



**SEGUNDO.-** Como cuestión previa debe determinarse por esta Primera Sala si la incompetencia por declinatoria propuesta por el representante legal de la demandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., a que se ha hecho alusión en los resultandos cuarto, quinto y sexto de la presente resolución, fue presentada o no dentro del término legal, toda vez que las cuestiones de competencia son orden público y por consiguiente, existe interés social en que en los casos, como ahora acontece, en que se suscita un conflicto competencial entre el Juez Tercero de lo Civil en el Distrito Federal (quien se declaró incompetente para conocer del juicio ordinario mercantil del caso, en cumplimiento de la ejecutoria de sus superior, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal) y el Juez Primero de Distrito en el Distrito Federal, quien igualmente se estima incompetente para conocer del referido juicio ordinario mercantil; se determine la procedencia de la referida incompetencia por declinatoria planteada.

En este orden de ideas, primeramente se estima oportuno hacer los siguientes señalamientos:

a) La incompetencia por declinatoria motivo del presente conflicto competencial, fue planteada por el representante legal de la demandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., en un juicio ordinario mercantil.

b) El escrito en el que se planteó la indicada incompetencia por declinatoria, fue presentado ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Federal, el día treinta y uno de

SUP  
JUSTI  
SECR



agosto de mil novecientos noventa y cuatro, como se advierte a fojas de la 34 a la 36 del cuaderno principal; en la inteligencia de que dicha presentación se hizo en el séptimo día hábil de los nueve con que contó la demandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., para contestar la demanda.

c) Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis se reformaron diversos ordenamientos legales, entre ellos el Código de Comercio. Ahora bien, con motivo de lo anterior el artículo 114, actualmente en vigor señala lo siguiente:

*"Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria o por declinatoria. Cualquiera de las dos que se elija por el que la haga valer, debe proponerse dentro del término concedido para contestar la demanda en el juicio que se intente, cuyos plazos se iniciaran a partir del día siguiente de la fecha del emplazamiento".*

d) Antes de que en la mencionada reforma, y concretamente en el precitado numeral se determinara específicamente el término dentro del cual deberán promoverse las incompetencias por declinatoria o por inhibitoria (que en un juicio ordinario mercantil ese término es de nueve días), ésta Primera Sala, una vez que se integraron los cinco precedentes respectivos, con fecha ocho de enero de mil novecientos noventa y

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MA C  
LA DE  
AREA DE  
PRIMERA

siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis jurisprudencial número 3/97 cuyo rubro y texto rezan como sigue:

*"COMPETENCIA POR INHIBITORIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL TERMINO PARA HACERLA VALER ES DE TRES DIAS SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO.- El Código de Comercio en el Libro Quinto que establece las disposiciones normativas de los juicios mercantiles, no prevé en su capítulo relativo a las competencias, que se encuentran dentro del Título Primero, un término específico para que la parte demandada haga valer la incompetencia por inhibitoria, por lo que debe atenderse, a fin de fijar tal término, a lo dispuesto en el Capítulo V denominado 'De los términos judiciales', dentro del cual el artículo 1079, fracción VIII (vigente hasta el 23 de julio de 1996), establece el término general de tres días para todos aquellos casos en que no se encuentre señalado un término específico en la ley, no se ubique en las hipótesis previstas en las demás fracciones de dicho numeral. Ahora bien, dicho término de debe computar desde el día siguiente al en que se hizo el emplazamiento, de conformidad con el artículo 1075, descontándose los días*





*inhábiles que señale el artículo 1064, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1076 del propio Código de Comercio". (Tesis Jurisprudencial 1<sup>ª</sup>/J.3/97, publicada en el Diario Oficial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo V correspondiente al mes de enero de 1997, Página 166).*

Así las cosas, en principio pareciera que en la especie, tomando en cuenta que, por una parte, la incompetencia por declinatoria del caso fue promovida fuera de ese término de tres días a que se refiere el aludido criterio jurisprudencial, y por otra parte el planteamiento de dicha incompetencia se hizo en una fecha anterior a la diversa fecha en que entraron en vigor las ya citadas reformas al Código de Comercio (veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, de conformidad con el Artículo Primero Transitorio del Decreto respectivo); que entonces habría que declarar que la referida incompetencia por declinatoria fue planteada extemporáneamente, más sin embargo, ésta Sala arriba a una conclusión diversa a la referida extemporaneidad, atentas las razones y consideraciones que a continuación se pasan a exponer:

El aludido criterio jurisprudencial tuvo como sustento medular, la consideración de que al no preverse (antes de la señalada reforma) en el capítulo relativo a las competencias, un término específico para que la parte demandada hiciera valer la competencia por inhibitoria, entonces debía de atenderse a fin de

RECEIVED  
A C C  
DE LA  
LA DE AC  
RIMBA

fijar tal término, a lo previsto en el artículo 1079 del Código de Comercio, (numeral éste vigente hasta el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y seis), en el que se establece un término general de tres días para todos aquellos casos en que no se encuentre señalado un término específico en la ley, ni se ubicasen en las hipótesis previstas en las demás fracciones de dicho numeral.

Pues bien, independientemente de que ahora ya se encuentre normativamente determinado en el artículo 114 vigente del Código de Comercio, que el término para proveer las cuestiones de competencia por inhibitoria o por declinatoria, es el mismo término concedido para contestar la demanda, según el juicio de que se trate (en la especie, un plazo de nueve días hábiles por tratarse de un juicio ordinario mercantil); esta Sala se aparta de lo sustentado en el criterio jurisprudencial en comento, en cuanto a su aplicabilidad a cuestiones competenciales por inhibitoria o por declinatoria, planteadas antes de la mencionada reforma al Ordenamiento Mercantil a que se viene haciendo alusión, ello en atención a lo que sigue:

La normatividad del Código de Comercio, antes de su más reciente reforma, en los concretos aspectos que aquí se analizan, era la siguiente:

En el Libro Quinto denominado "De los Juicios Mercantiles", específicamente en su Título Segundo, bajo la denominación "De los Juicios Ordinarios" integrado por los





artículos del 1377 al 1390, destaca particularmente en relación con el presente análisis, lo que disponía el artículo 1379, al prevenir que:

*"Las excepciones que tenga el demandado cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación de la demanda y nunca después, a no ser que fueran supervenientes."*

Por otro lado, en cuanto al término para la contestación de la demanda en los juicios ordinarios mercantiles, el numeral 1378 era del siguiente tenor:

*"Con el escrito de demanda presentará el actor las copias simples prevenidas en el artículo 1061, las cuales debidamente confrontadas se entregarán al demandado para que produzca su contestación dentro del término de nueve días"*

Así mismo, en el artículo 1096 se establecía que:

*"las cuestiones de competencia pueden promoverse por inhibitoria o por declinatoria. La inhibitoria se intentará ante el Juez a quien se crea competente,*

LA C-  
DE L-  
JOSÉ ANTONIO DE  
PRIMERA SALA

*pidiéndole que dirija oficio al que estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos. La declinatoria se propondrá ante el Juez a quien se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. --- El litigante que hubiere optado por uno de esos medios no podrá habandonarlo y recurrir Al otro. Tampoco se podrán emplear sucesivamente, debiendo pasarse por el resultado de aquel a que se haya dado preferencia. La inhibitoria se sujetará a lo dispuesto en los artículos 1114 a 1131; la declinatoria se promoverá y decidirá en los mismos términos que las demás excepciones dilatorias".*

Dentro de este contexto normativo del Código de Comercio vigente en la época en que se promovió por el representante legal de la demanda GONZALEZ ZORRILLA, S.A., la incompetencia por declinatoria, cuya oportunidad respecto de su promoción aquí se viene analizando, se obtiene de manera natural y lógica, lo que sigue:

**I.- Las excepciones que tenga el demandado cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación de la demanda (nunca después a menos que sean supervenientes) (artículo 1379).**

**II.- La declinatoria se promoverá y decidirá en los**



68

**misimos términos que las demás excepciones dilatorias**  
(artículo 1096, parte final)

III.- El demandado debe contestar la demanda entablada en su contra **dentro del término de nueve días** (en tratándose de juicios ordinarios mercantiles) (artículo 1378).

De las presentes puntualizaciones (que constituyen verdaderas premisas), **basadas en los respectivos textos del Código de Comercio vigente en la época en que se planteó la incompetencia por declinatoria en cita**, surge el siguiente silogismo con su correspondiente conclusión:

Toda vez que la **declinatoria debe promoverse en los misimos términos que las demás excepciones dilatorias**, entonces debe hacerse valer en la contestación de la demanda, y por consiguiente **dentro de los nueve días hábiles que específicamente se prevé en el Ordenamiento de Comercio en cita**.

En este orden de ideas, ante la manifiesta conducencia técnico jurídica de estas consideraciones, sustentadas, como ya ha quedado señalado y ahora se reitera, en las correspondientes disposiciones del ordenamiento legal en comento, vigente en la época en que se propuso la multicitada incompetencia por declinatoria; se hace menester pasar ahora hacer notar que el núcleo esencial del criterio jurisprudencial que ha quedado transcrito con antelación, partió de un enfoque erróneo o distorsionado y no de la normatividad que realmente debió ser



COPIA  
DE LA SENTENCIA  
A DE ACUERDO  
CON LA LEY

abordada analíticamente, para el señalamiento del término y de la oportunidad para la promoción, en los juicios ordinarios mercantiles, de la incompetencia por declinatoria. En efecto, se soslayó el sentido y alcances de lo previsto en lo ya mencionados artículos 1379, 1096 y 1378 del Código de Comercio, antes de su más reciente reforma, de cuya natural adminiculación se obtiene, en lo que aquí interesa destacar, por una parte, la naturaleza jurídico procesal de la incompetencia por declinatoria (**como una excepción dilatoria**); y por otra parte, la oportunidad procesal de hacerla valer (al contestarse la demanda, o más precisamente, **dentro del término para producir tal contestación**. La evidente demostración de que lo anterior resulta acertado o correcto, es que precisamente al reformarse diversos preceptos del indicado Código de Comercio, entre ellos el ya transcrito numeral 114 y el 122 que en su parte conducente preceptúa que: *"Son excepciones procesales las siguientes: — I. La incompetencia del Juez;..."*, de manera inequívoca determinaron que las cuestiones de incompetencia por inhibitoria o por declinatoria, **deben proponerse dentro del término concedido para contestar la demanda en el juicio en que se intente**, en el claro entendido de que la mencionada incompetencia del Juez es precisamente una de las **excepciones procesales**.

Por si lo anterior no bastare, resulta que el artículo 127 en vigor del citado Código de Comercio, con meridiana claridad estatuye que:

*"Todas las excepciones*



69

*procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda, ...".*

De todo lo anteriormente expuesto y razonado, se arriba conclusivamente, en lo que aquí interesa destacar, a lo siguiente:

A) La argumentación sustentadora del criterio jurisprudencial en este considerando referido, vinculó sus premisas a aspectos no conducentes o idóneos, en su objetivo por determinar el término para la promoción de la incompetencia por inhibitoria (y también por declinatoria), dejando de lado el contenido y alcance de los artículos 1378, 1379 y 1096 del Código de Comercio, vigentes en la época en que se promovió la multicitada incompetencia por declinatoria, que en su natural administración permitían esa determinación, aunque no de tres días como se supuso en ese criterio jurisprudencial, sino de nueve días en los juicios ordinarios mercantiles.

B) Como ya ha quedado dicho en líneas anteriores y ahora se reitera de nueva cuenta, las reformas al Código de Comercio en los aspectos que aquí se han destacado, no hacen sino confirmar la conducencia de las estimaciones que han quedado vertidas en este análisis.

C) La promoción de la incompetencia por declinatoria por el apoderado de la parte demanda GONZALEZ ZORRILLA, S.A., fue hecha en tiempo, esto es, dentro del plazo de nueve



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CIA D-14  
ESTADO DE GUJARAT  
A. P. 1994



días para la contestación de la demanda.

**TERCERO.-** La consideraciones medulares que sustentan, por una parte, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (con motivo del recurso de apelación que el apoderado de la demandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., interpuso en contra de la determinación del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Federal que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el aludido apoderado), y por otra parte, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, son las que a continuación se pasan a reseñar:

**A)** La referida Sala expuso que: La relación que une a las partes en el juicio ordinario mercantil de referencia, se deriva de un contrato de fletamiento celebrado por la Empresa Olega, S.A., y Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S.A., y que dicho contrato fue celebrado para dar cumplimiento al contrato de compra-venta mercantil número [REDACTED] por la actora con la Empresa JOSE MARIA LAZARA, S.A., como intermediaria comercial de Olega, S.A., por lo que los efectos del contrato de fletamiento antes citado es extensible a la relación que une a la actora con las demandadas y que por tanto, resultan aplicables las disposiciones del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, en relación con las normas de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, toda vez que en el contrato de compra-venta antes mencionado se estableció que la mercancía materia del mismo se transportaría desde la Ciudad de Buenos



Aires Argentina al Puerto de Tampico, Tamaulipas, lugar en donde la mercancía debía ser entregada y recogida por la actora, habiéndose transportado dicha mercancía por vía marítima y por conducto de la Empresa demandada; que en consecuencia, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento mencionado, en cuanto establece que dicho Reglamento se aplicará en todo lo relativo al movimiento de mercancías en transporte multimodal internacional, a los puertos marítimos y terrestres nacionales, terminales interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que podrán hacerse maniobras para su carga y descarga en función de las obras e instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con este tipo de transporte y regulara la actividad del transporte multimodal internacional. Que por otra parte, y partiendo de la premisa de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que resulta igualmente aplicable al caso el artículo 10 del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, que establece que: *"El operador de transporte multimodal internacional es responsable de las mercancías o bienes desde el momento en que éste o cualquiera de sus representantes o agentes reciban la mercancía del usuario o de sus representantes hasta el momento de la entrega de la misma al destinatario, en los términos que fijen las leyes aplicables a cada modo de transporte. En consecuencia, el operador de transporte multimodal internacional responderá por: a).- La pérdida total o parcial de las mercancías o bienes; b).- De los daños o averías experimentadas a los mismos; c).- De la demora en su entrega"*. Que así las cosas, puntualiza la Sala, es indudable que las normas que se aplicarán al caso en controversia serán las de la



1 CCR  
DE 1 AB  
A DE 100  
UNIDAD SALA

Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la cual en su artículo 1 establece que: *Serán objeto de esta ley: La navegación marítima-portuaria y sus maniobras conexas; las empresas navieras; los buques, los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo*".

Que en otro orden de ideas, prosigue considerando la mencionada Sala, si bien es cierto que la fracción I del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la jurisdicción concurrente cuando en la aplicación de leyes o de los tratados internacionales sólo se afecten intereses particulares, también es cierto que este supuesto **no se surte en el presente caso, toda vez que al haberse hecho uso de la vía marítima para la transportación de las mercancías del caso, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que establece: "Las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales"**; en la inteligencia de que el artículo 1 de la misma ley **contempla como vía general de comunicación a los mares territoriales**. Que entonces queda de manifiesto que el juicio ordinario mercantil de donde dimana el presente conflicto competencial, debe ser conocido por los Tribunales Federales, atento a lo dispuesto por el artículo 5 de la mencionada Ley General de Vías de Comunicación, que a la letra dice: *"Corresponderá a los tribunales federales conocer de todas las controversias del orden civil en que fueren parte actora, demandada o tercera opositora una empresa de vías generales de comunicación, así como de los delitos contra la seguridad o integridad de las obras o*



contra la explotación de las vías, y los que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de sus servicios, o el menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad de las empresas que estén bajo su responsabilidad"

Finalmente, puntualiza la mencionada Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que aún cuando claramente la Ley de navegación y Comercio Marítimos no establece que las controversias que resulten en la aplicación de dicha ley deban ser conocidas por los Tribunales Federales, que debe hacerse notar que atento lo dispuesto en los artículos 3º. y 5º., ya citados, de la indicada Ley de Vías Generales de Comunicación, los Tribunales Federales son competentes para conocer del referido juicio ordinario mercantil.

B) El Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por su parte no aceptó la competencia declinada en su favor, argumentando lo siguiente:

Que con fundamento en los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no se aceptaba la precitada competencia, tomando en cuenta que tales numerales establecen que, cuando las controversias del orden civil o criminal se susciten sobre la aplicación o cumplimiento de leyes federales o de tratados internacionales y dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Que en el

RECEIVED  
DE LA  
A DE  
MEXICO



caso, al tratarse de una controversia entre particulares, la parte actora determinó presentar su demanda ante los tribunales del Distrito Federal, fincando de tal manera la competencia en el fuero común.

Que el argumento de la citada Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de que el artículo 5º., de la Ley de Vías Generales de Comunicación, finca la competencia de los juzgados federales, cuando intervenga una empresa de vías generales de comunicación, debido a que dicha disposición no puede estar por encima de la respectiva disposición constitucional; que sirve de apoyo a lo anterior, concluye la Sala, la Tesis Jurisprudencial visible en la página 120, Cuarta Parte, Volumen 163-168, 7ª., Época, Tercera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

*"VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL.- Tratándose de un juicio civil seguido en contra de una línea que presta servicio de transporte en un camino federal, con sujeción a la concesión relativa que le fue otorgada, tal circunstancia no es bastante para desentenderse del régimen competencial establecido en la Constitución, puesto que el artículo 5º., de la Ley de Vías Generales de Comunicación no puede prevalecer sobre los artículos 104 y 124 Constitucionales, los cuales sólo reservan a*



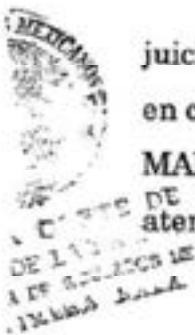




los tribunales federales aquellas controversias que se susciten sobre aplicación de leyes federales. Aún en el supuesto de que la litis planteada en un asunto debiera resolverse conforme a las leyes de carácter federal, el caso quedaría comprendido en la segunda parte de la fracción I del precitado artículo 104, la cual dispone que en cuanto dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán decidirse a elección del actor, por los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Por tanto, en ese supuesto, debe observarse la distribución de competencias establecidas por dicho precepto constitucional, resolviendo que es competente para conocer del juicio natural el juez elegido por el actor al promover el juicio."

**CUARTO.-** La competencia para seguir conociendo del juicio ordinario mercantil promovido por CEREZO, S.A., DE C.V., en contra de GONZALEZ ZORRILLA, S.A., y EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, S.A., radica en el fuero federal, atenta las siguientes razones y consideraciones:

Como cuestión preliminar, se estima pertinente hacer aquí algunas referencias en torno al derecho marítimo a fin de evidenciar que se trata de una rama del derecho con perfiles



propios y que no constituye un mero apéndice del derecho mercantil.

De la superficie total del planeta, más del setenta por ciento se encuentra cubierta por agua, constituyendo esta geografía marítima del globo terráqueo desde la más remota antigüedad, el incentivo y la curiosidad del hombre de desplazarse por sus mares y océanos, en razón de fines muy precisos: el intercambio comercial, la conquista de nuevos territorios y la comunicación con otros grupos humanos.

Alrededor de la navegación surgieron toda una serie de usos y costumbres, que evolutivamente, fueron confluyendo en una normatividad que en la actualidad perfila al derecho marítimo con características propias, que lo destacan como una rama autónoma del derecho en general.

Ciertamente que dada la estrecha vinculación entre las actividades marítimas y el tráfico comercial a través del medio acuoso, durante mucho tiempo los diversos tratadistas sostuvieron que el derecho marítimo no era sino una expresión particular del derecho mercantil, sin embargo, tal tendencia de subsumir el derecho marítimo en el derecho mercantil, fue paulatinamente desvaneciéndose, al ampliarse la normatividad del derecho naviero no solamente, como sucedió al principio, alrededor de los buques, sino a toda una serie de campos conductuales y eventos propios del creciente desarrollo de las colectividades humanas, relacionadas con actividades navieras.



73

En la actualidad los estudiosos y doctrinarios del derecho marítimo, coinciden en que esta rama del derecho ha adquirido una definida autonomía, en varios aspectos, de los cuales interesa destacar aquí los relativos a la autonomía legislativa y autonomía jurisdiccional, la primera de las cuales se actualiza esencialmente por la regulación normativa de la materia marítima en un sólo cuerpo legislativo (código o ley), sin que por ello se desvinculen de otros ordenamientos íntimamente relacionados con las cuestiones marítimas; en tanto que la segunda se determina por la competencia exclusiva de una específica clase de jueces dedicados definitivamente al conocimiento y resolución de conflictos derivados de la navegación.

Históricamente, en la legislación francesa, encontramos de manera definida la institución jurídica del Almirantazgo en el Reglamento de doce de noviembre de mil seiscientos sesenta y nueve que lo estableció y que más adelante se reproduce en el artículo 1º del Título Primero de las Ordenanzas de Colbert cuya autoría fue de Jean Baptiste Colbert, Ministro del Rey Luis XIV, publicada en agosto de mil seiscientos ochenta y uno, y que constituyó la primera base y modelo de codificaciones posteriores en su género, al haber reunido en un cuerpo legal coherente, instituciones de derecho privado al lado de normas de derecho público así como de derecho procesal, separando las instituciones marítimas de las comerciales en general. En dicho artículo 1º, se estableció que "La justicia será ejercida en nombre del almirante en todos los lugares del Almirantazgo". Asimismo en el Título Segundo del Libro Primero de las citadas ordenanzas, llamado "De la

Competencia de los Jueces del Almirantazgo, se establece en su artículo 1º, que: "Los Jueces del Almirantazgo conocerán privativamente a cualquier otro, entre todas las personas de cualquier calidad que ellas sean, privilegiadas, francesas o extranjeras, tanto actor como demandado, de todo aquello que concierne a la construcción, aparatos, avituallamiento, equipo, venta y adjudicación de los buques". Más adelante se confirma esta competencia en el Reglamento de doce de enero de mil setecientos diecisiete. Por otro lado en las mismas ordenanzas de Colbert, en el Libro Primero Título XIII, artículo 5º, se prevé que: "Los juicios emitidos en materias de ventas y compras de buques, flete o arrendamiento, contratos de arrendamiento de embarcaciones, seguros, averías gruesas u otros contratos concernientes al comercio y la pesca marítima serán ejecutados por éste". Así pues la llamada Justicia del Almirantazgo se estableció para juzgar los aspectos mercantiles o comerciales de la navegación; asimismo, esta institución jurídica de los Tribunales del Almirantazgo fue acogida en el Código de Napoleón, lo que igualmente aconteció en la legislación de la Gran Bretaña.

En cuanto a los Estados Unidos, desde que alcanzan su independencia también incorporan las llamadas Cortes del Almirantazgo y Jurisdicción Marítima, previendo en la Sección 9 de la Judiciary Act de 1789, que "Los Juzgados de Distrito... tendrán también exclusivo y original conocimiento de todas las causas civiles del Almirantazgo y Jurisdicción Marítima"

Modernamente se conceptúa al derecho marítimo, también



24

llamado derecho de la navegación, como el conjunto de reglas jurídicas que regulan los sujetos, los bienes y las relaciones jurídicas derivadas de la navegación o en ocasión de la misma, cualquiera que sea el medio, lugar o propósito con que se realice y que posibilite su efectiva realización (Compendio del Derecho de la Navegación, Osvaldo Blas Simone, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987, página 20).

En cuanto a la normatividad sobre cuestiones marítimas en el Derecho Constitucional Mexicano, es en el artículo 73, fracción XIII, en donde se establece como una de las facultades del Congreso de las Unión, la de: "dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra."

Esta facultad ha sido conferida al Congreso en forma invariable desde la Constitución de 1824, cuando se incorporó la Justicia del Almirantazgo a los Tribunales Federales; advirtiéndose del contenido de su artículo 50, fracción XVII, que se otorgaban facultades al Congreso para expedir reglas relativas a las patentes de corso y para declarar buenas o malas las presas de mar y tierra, lo cual fue acogido y por tanto reiterado en la diversa Constitución de 1857, en su artículo 72, fracción XV, al disponer: "El Congreso tiene facultades: ... XV.- Para reglamentar el modo en que deban expedirse las patentes de corso o, para dictar leyes según las cuales, deba declararse buenas o malas las presas de mar y tierra y para expedir las relativas al derecho marítimo de paz y guerra..."

15  
IA C  
D  
MA  
R

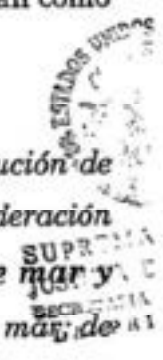


Por otro lado en el Sistema Jurídico Mexicano, es tal la importancia que se le concede al derecho marítimo, que la Constitución General de la República, expresamente previene en su artículo 104, fracción II, lo que sigue:

*"Art. 104.- Corresponde a los  
Tribunales de la Federación conocer: --- II.  
De todas las controversias que versen sobre  
derecho marítimo."*

Ahora bien esta disposición constitucional que tiene su antecedente en la Constitución de 1824 y en la de 1857, particularmente en el artículo 97 de esta última, ya que se otorgaba competencia a los Tribunales de la Federación (Suprema Corte de Justicia y Tribunales de Circuito) para conocer de las controversias que versaren sobre derecho marítimo, y si bien no se hacía referencia al término 'controversias que versan sobre derecho marítimo', a que se alude actualmente, se puede deducir de su texto que el Constituyente quiso referirse a los mismos conflictos marítimos. Los preceptos relacionados con el presente análisis, rezaban como sigue:

*Art. 137, fracción V, (Apartado Sexto de la Constitución de 1824): 'Corresponde a los Tribunales Judiciales de la Federación conocer: ... de las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra y contrabandos; de los crímenes cometidos en alta mar, de las ofensas contra las naciones de los Estados Unidos Mexicanos,*





75

de los empleados de Hacienda y Justicia de la Federación y de las fracciones de la Constitución y leyes generales, según se prevenga por la ley...'

Artículo 97, fracción II, (de la Constitución Política de 1857): ... 'corresponde a los Tribunales de la Federación conocer: ... de las que versen sobre derecho marítimo (obviamente se refiere a controversias)

Los precitados antecedentes históricos, no dejan ninguna duda en cuanto a que desde la Constitución Federal de 1824, la voluntad del Constituyente, fue la de otorgar al legislador federal la facultad de expedir normas relativas a las relaciones jurídicas suscitadas o llevadas a cabo en el mar, respecto de los buques, las presas en él capturadas y los demás actos jurídicos que se realizaren, ya sea en tiempos de paz o de guerra; ésto con el propósito o finalidad de preservar la seguridad de la Nación, dado el carácter multilateral de las relaciones jurídicas, económicas y políticas, con otros Estados o Naciones.

La autonomía del Derecho Marítimo como conjunto de normas jurídicas de naturaleza federal, y no de carácter genéricamente mercantil, (respecto del cual opera la competencia concurrente), queda manifiesta si se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 1°. de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en el sentido de que son objeto de dicha ley: La navegación marítima, portuaria y sus maniobras conexas; las empresas navieras; los buques, los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo', ya que en estos conceptos no se toma en cuenta como característica principal la nota de



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
MEXICO

mercantilidad de los actos y la calidad de los sujetos comerciantes o no, que se exige en el derecho mercantil. Por otra parte, el contenido de dicho ordenamiento legal también pone de manifiesto la autonomía normativa a que se ha hecho referencia, pues en la repetida ley se regulan situaciones y actos jurídicos distintos a aquellos que realizan los sujetos que hacen del comercio su ocupación ordinaria como son: los espacios marítimos, el régimen administrativo de la navegación, el comercio marítimo, en el que se comprende el buque, la empresa marítima, la fortuna de mar y el abandono, las personas, tripulación y capitanes, los contratos de arrendamiento de nave; el fletamento de sus diversas variedades y seguro marítimo; las averías gruesas y las maniobras en los puertos.

Ahora bien, de haber sido la intención del Constituyente el que el derecho marítimo quedara comprendido dentro del campo del derecho mercantil, no tendría ningún sentido la ya mencionada fracción II transcrita del artículo 104 de la Constitución General de la República, que de manera específica establece la competencia de los Tribunales de la Federación, para conocer de todas las controversias que se susciten sobre derecho marítimo, con la única excepción a esta regla general, que se prevé en la fracción I de este mismo numeral, en la que se contiene la llamada "jurisdicción concurrente", de acuerdo a la cual, cuando se afecten solamente intereses particulares, podrán conocer de las respectivas controversias a elección del actor, los Tribunales de la Federación o bien los Jueces y Tribunales del Orden Común, de los Estados y del Distrito Federal. En este orden de ideas, resulta naturalmente evidente que las





cuestiones relacionadas con el derecho marítimo, escapa a establecido en la ya referida fracción I del artículo 104 Constitucional.

Así pues, la autonomía del derecho marítimo respecto de otras ramas del derecho, y concretamente del derecho mercantil, se ha originado como consecuencia del mandato constitucional a la forma de gobierno y al objetivo fundamental de preservar los intereses de la Nación, pues ha sido manifiesta la intención del legislador en no fusionarlo con otras ramas del derecho, si se atiende a que en el artículo 72, fracción X, de la Constitución de 1857, se facultó al Congreso Federal para legislar en materia de comercio, pero a la vez en la fracción XV del mismo numeral, se le autorizó para expedir leyes sobre Derecho Marítimo.

Como natural secuela de la precedente estimación conclusiva, esto es que las cuestiones relacionadas con el derecho marítimo resultan ser de la competencia de los tribunales federales, cabe ahora puntualizar que en el presente caso, los eventos de donde dimana la controversia jurisdiccional que finca la parte actora en contra de los codemandados, para que el órgano jurisdiccional competente, conozca y falle el asunto, mismos que se narran en el escrito de demanda, **tienen una íntima relación con aspectos y cuestiones de derecho marítimo**, tomando en cuenta que como adecuadamente lo refiere la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que la relación que une a las partes en el mencionado juicio ordinario mercantil, **se deriva de un contrato de fletamiento** celebrado por la Empresa Olega, S.A.,

COPIA  
LA FOLIA  
ACCIONES  
444 4444

y la EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, S.A., (que es precisamente una de las dos codemandadas en el aludido juicio mercantil); y que además, como igualmente lo señala la Sala de mérito, dicho contrato fue para dar cumplimiento al contrato de compra-venta mercantil número [REDACTED] celebrado por un lado, por la mencionada parte actora y por otro lado, por la diversa empresa José María Lazara, S.A., como intermediaria comercial de Olega, S.A.

Se estima pertinente hacer notar aquí, que los anteriores señalamientos de la Sala de referencia, se sustentan básicamente en las propias aseveraciones expuestas por la parte actora en su escrito de demanda, mismas que dado el estado actual de los autos, no se advierten hasta ahora elementos que permitan arribar a diversas estimaciones a las referidas por esa Sala, máxime que la litis todavía no ha quedado establecida, pues aún cuando la codemandada GONZALEZ ZORRILLA, S.A., contestó en su oportunidad la demanda entablada en su contra por la actora, lo hizo ad cautelam y se mandó reservar por el respectivo juez, para determinar lo conducente una vez que se definiera el conflicto competencial planteado. De lo anterior se advierte que aunque pudiera caber la posibilidad de que al delimitarse la litis del juicio o bien durante la secuela del proceso relativa al mismo, las manifestaciones de la actora (que ahora cobran relevante importancia para determinar en que fuero radica la jurisdicción), pudieran quedar desvirtuadas, eso es algo que podría acontecer a futuro, y por lo tanto, por ahora, es menester en atención a la más elemental lógica, atenerse al estado actual del multicitado juicio; todo ésto en el entendido de que en cuestiones



27



competenciales, no cabe ocuparse del fondo del juicio de donde dimana el conflicto competencial, pues ello es de la incumbencia del juez que siga conociendo de dicho juicio, pues de lo contrario en distorsión de lo que ahora debe determinarse, se invadiría un campo de acción propia del respectivo juzgador.

En relación a las consideraciones que expuso el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con base en las cuales no aceptó la competencia declinada en su favor, se hace ahora las siguientes consideraciones:

Se argumentación se reduce a dos señalamientos básicos, el primero de ellos consistente en que en la especie al tratarse de una controversia entre particulares, la parte actora determinó presentar su demanda ante los tribunales del Distrito Federal, fincando así la competencia en el Fuero Común, ello dentro de lo establecido en los artículos 104, fracción I, Constitucional y 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el segundo de ellos, consistente en que el artículo 5º., de la Ley de Vías generales de Comunicación, invocado por la Cuarta Sala del Tribunal Superior del Justicia del Distrito Federal, que finca la competencia de los juzgados federales, cuando intervenga una empresa de vías generales de comunicación, no puede estar por encima del ya aludido artículo 104, fracción I, Constitucional, en apoyo de lo cual el indicado Juez Federal citó la tesis jurisprudencial que ha quedado transcrita a fojas 100 y 101 de esta resolución, bajo la voz: "VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL".

Pues bien, por lo que concierne a la primera de las reseñadas consideraciones del Juez de Distrito, cabe señalar que éste, soslayando los concretos y específicos señalamientos de la mencionada Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que la relación que une a las partes en el juicio ordinario mercantil de donde dimana el conflicto competencial en análisis, deriva de un contrato de fletamiento celebrado por la Empresa Olega, S.A., y la Empresa Líneas Marítimas Argentinas, S.A., y que dicho contrato fue celebrado para dar cumplimiento al diverso y precedente contrato de compra-venta mercantil efectuado por la actora con la Empresa José María Lazara, S.A., como intermediaria comercial de Olega, S.A.; solamente se concreta a estimar que, como se trata de una mera controversia entre particulares, entonces al estarse en el caso de la denominada jurisdicción concurrente, la parte actora escogió los Tribunales del Fuero Común del Distrito Federal. Como se advierte, el mencionado Juez de Distrito deja de lado que en el presente caso, la señalada controversia, se plantea en la propia demanda por la actora, como derivada de un contrato de transporte marítimo. Así las cosas, no puede desatenderse esa derivación que es la que válidamente permite determinar que radica en el Fuero Federal la competencia para seguir conociendo de la aludida demanda, en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 104 Constitucional, pues aunque esa controversia no versa directamente sobre una cuestión de transporte marítimo, sí deriva de un contrato de esta naturaleza, y por tanto no es permisible desvincular la materia de lo demandado por la actora, como si se tratara de una cuestión de mero derecho mercantil desvinculada totalmente de ese contrato de fletamiento



78

marítimo; siendo esto una cuestión muy importante que no debe perderse de vista, por las siguientes razones:

El contrato de fletamiento o transporte marítimo consiste en el acuerdo de voluntades por medio del cual, una de las partes llamada transportador (denominado también porteador o transportista) asume la obligación de trasladar por vía marítima la carga materia del contrato. Ahora bien, en el presente caso, según se advierte de las constancias conducentes de autos, una vez que arribaron al Puerto de Tampico, Tamaulipas, procedentes de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, los diversos cargamentos de la mercancía relacionada con los hechos (cacahuete), misma que venía en contenedores, los eventos reseñados en la demanda, se dieron en relación con tales contenedores y en virtud de lo cual Cerezo, S.A., DE C.V., demanda de González Zorrilla, S.A., y de Empresas Líneas Marítimas Argentinas, S.A., el pago de daños y perjuicios, que según sostiene aquélla, le fueron ocasionados con motivo de la falta de cumplimiento de las obligaciones de las demandas derivadas del mencionado contrato de fletamiento.

Con respecto a los mencionados contenedores, cabe señalar aquí que su uso o utilización en contratos de transporte marítimo, se encuentra regulado por el llamado transporte multimodal, mismo que en general se conceptúa como el transporte de mercancías, por varios medios diferentes de transporte (por lo menos dos), desde un lugar situado en un país en que el operador de transporte multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar para su entrega situada en un





país diferente. Desde luego que el transporte multimodal o combinado era ya conocido y practicado desde antes de que a nivel internacional se reglamentara su uso, pero lo verdaderamente importante de dicha reglamentación, se hace consistir en que aunque una determinada carga de mercancía se transporte por diversas vías, ello se hace por esta institución jurídica, como si se tratara de una sola operación, con un sólo documento de porte y bajo una sola responsabilidad durante toda la travesía. Así tenemos que en el Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional (anterior al vigente), publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y dos, en su parte considerativa, se expuso entre otras cosas, lo que enseguida se transcribe:

*"... SEGUNDO.- Que el intercambio de mercancías, sobre todo en el comercio internacional, exige que los diversos modos que intervienen en su transporte se combinen adecuadamente de tal manera que se preste un servicio integrado y eficiente desde el punto en que un porteador se hace cargo de las mercancías, hasta el punto en que se realiza la entrega al consignatario o destinatario. ---*  
*TERCERO.- Que a fin de garantizar al usuario la seguridad de sus mercancías y bienes, así como de su transportación y transbordo en los distintos medios de transporte que se requieran para llegar a su*





79

punto de destino, es conveniente determinar la responsabilidad entre los usuarios y una nueva figura denominada operador de transporte multimodal. --- CUARTO.- Que en el ámbito internacional se ha adoptado el convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional, por el que se regula el uso de los diversos modos de transporte en tráfico integrado, a través de un solo operador de transporte multimodal y mediante la expedición de un sólo documento de transporte lo que hace necesario que en nuestro país se tomen medidas para ajustar nuestros sistemas de operación a los usos internacionales, a fin de preservar la nacionalidad mexicana de los prestadores de servicios en el territorio nacional. --- QUINTO.- Que la Ley General de Vías de Comunicación establece la obligación de que los concesionarios y permisionarios de Vías Generales de Comunicación combinen sus servicios cuando el interés público lo exija. --- SEXTO.- Que es necesario fijar las bases y condiciones con las cuales debe efectuarse el transporte multimodal internacional en nuestro país y establecer las modalidades que dicta en interés público para preservar y dar seguridad al desarrollo del transporte

GOBIERNO DE  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
MEXICO D.F.



*nacional en beneficio de la colectividad y de los propios prestadores de servicios".*

Así mismo en los artículos 1º, y 9º, del precitado ordenamiento, respectivamente se estatúa lo que sigue:

*"ARTICULO 1º.- Este Reglamento se aplicará en todo lo relativo al movimiento de mercancías en transporte multimodal internacional, a los puertos marítimos y terrestres nacionales, terminales interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que podrán hacerse maniobras para su carga y descarga en función de las obras e instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con este tipo de transporte y regulará la actividad del operador del transporte multimodal internacional. --- Se presumirá que el transporte de mercancías unitarizadas que tengan su origen o destino en el extranjero, se realiza al amparo de un contrato de transporte multimodal..."*

*ARTICULO 9º.- El operador de Transporte Multimodal Internacional es responsable de las mercancías o bienes desde el momento en que éste o cualquiera de sus representantes u operadores que*

ESTADO  
SECRETARÍA  
DE ECONOMÍA  
FISCAL  
1.4

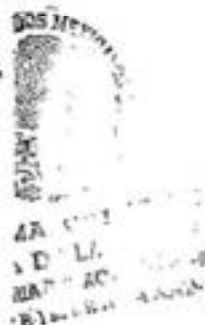


reciban la mercancía del usuario o de sus representantes hasta el momento de la entrega de la misma al destinatario, en los términos que fijen las leyes aplicables a cada medio de transporte. --- En consecuencia, el operador de transporte multimodal internacional responderá por: --

- a).- La pérdida total o parcial de las mercancías o bienes. --- b).- De los daños o averías experimentados en los mismos. --- c).- De la demora en su entrega".

Por diverso Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación de fecha siete de julio de mil novecientos ochenta y nueve, se expidió por el Ejecutivo Federal el nuevo Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional, cuyos artículos 1º, y 10, respectivamente, ahora rezan como sigue:

"ARTICULO 1º.- Este Reglamento se aplicará en todo lo relativo al movimiento de mercancías en transporte multimodal internacional, a los puertos marítimos y terrestres nacionales, terminales interiores, bodegas o cualquier otra instalación en que podrán hacerse maniobras para su carga y descarga en función de las obras e instalaciones; a los seguros y tarifas relacionadas con este tipo de transporte y regulará la actividad del operador del



*transporte multimodal internacional. Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán el derecho del usuario a elegir entre el transporte multimodal y el transporte segmentado".*

*"ARTICULO 10.- El operador de transporte multimodal internacional es el responsable de las mercancías o bienes desde el momento en que éste o cualquiera de sus representantes o agentes reciban la mercancía del usuario o de sus representantes hasta el momento de la entrega de la misma al destinatario, en los términos que fijen las leyes aplicables a cada modo de transporte. --- En consecuencia, el operador de transporte multimodal internacional responderá por: --- a) la pérdida total o parcial de las mercancías o bienes. --- b) De los daños o averías experimentados a los mismos. --- c) De la demora en su entrega".*

Del cotejo de los artículos 1º, y 9º, del Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional precedentemente vigente al actual, con los numerales 1º, y 10º, de éste último, se obtiene que en el artículo 1º, del Reglamento en vigor, se introduce la prevención de que, sus disposiciones no afectarán el derecho del usuario a elegir entre el transporte multimodal y el transporte



segmentado, en tanto que en el anterior artículo primero, se establecía la presunción de que el transporte de mercancías unitarizadas que tuvieran su origen o destino en el extranjero, se realizaba al amparo de un contrato de transporte multimodal. En cuanto al contenido de los artículos 9º, y 10º, del anterior y actual Reglamento, salvo pequeñas variaciones, no sufrió una modificación sustancial.

Ahora bien, en el presente caso y a la luz de lo previsto en el ya mencionado artículo 1º, del indicado Reglamento actualmente en vigor, resulta que hasta ahora no hay evidencia alguna en el sentido de que el usuario, en la especie, la parte actora, haya elegido el transporte segmentado, y por consiguiente, en tanto no se acredite lo contrario, hasta ahora debe válidamente presumir que dicha actora se acogió a la opción del transporte multimodal, naturalmente encuadrado en la normatividad del derecho marítimo, concretamente por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, vigente en la época de los hechos (mil novecientos noventa y cuatro).

En relación con la señalada presunción en el estado actual del juicio ordinario mercantil del caso, se estima oportuno referir aquí los siguientes señalamientos que se hacen en las partes conducentes del escrito de demanda:

*"... 4. Dentro del precio estipulado de venta, se incluían los gastos por concepto de flete, esto es, la transportación del producto empacado en los contenedores desde la*

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ciudad de Buenos Aires, Argentina hasta el puerto de Tampico, Tamaulipas, México, lugar donde la mercancía debía ser entregada y recogida por mi representada o bien por la empresa que se contratara para la transportación terrestre de la mercancía hasta la ciudad de México, D. F., lugar donde tiene su domicilio mi representada. --

- Asimismo, se incluía dentro del precio del flete, el préstamo de los contenedores que contenían la mercancía, desde que partiera el embarque desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina hasta el puerto de Tampico, Tamaulipas, incluyéndose un plazo de 15 días hábiles de préstamo de los contenedores, sin costo alguno, para efectos de su transportación a la ciudad de México, D. F., computándose desde el día en que se hiciera entrega de los contenedores con la mercancía en el puerto de destino, hasta una vez devueltos al mismo puerto. --- Para tales efectos la empresa vendedora, Olega, S. A., celebró contrato de fletamento con la negociación 'Empresa Líneas Marítimas Argentinas' S. A. a efecto de que se hiciera cargo tanto de la transportación, como del préstamo de los contenedores... 26. ... en virtud de la negativa de entrega de los contenedores por las demandadas, mi







representada tuvo que pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cantidad de Ns [REDACTED]

[REDACTED] nuevos pesos m. n.), por concepto de almacenaje por uso de las Instalaciones Portuarias del Recinto Fiscal, Puertos Mexicanos, oficina en Tampico, Tamaulipas, ya que de conformidad con lo establecido por el artículo 166 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, esta le otorga la facultad al capitán del buque de ordenar, si el puerto que de destino como es el caso, la descarga y depósito de los efectos transportados. Situación que así se hizo, pero manifestando a su Señoría que no fue por causas imputables a mi representada, sino por órdenes expresas de las empresas demandadas, y por lo mismo por causas imputables a éstas, además de ser ilegales, Situación que se demuestra con las declaraciones de pago de derechos, mismas que se acompañan a la presente como Anexos 23, 24 y 25. --- Se hace ver a su Señoría que existía el riesgo de perder la mercancía ya que al transcurrir el plazo de 60 días de almacenaje del producto la oficina descrita procede a poner en remate las mercancías almacenadas, motivo por el

MEXICO  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
C. 57-  
3333  
DE 1995  
AL SEÑOR JUEFE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

*cual mi representada se vio en la imperiosa necesidad de realizar las erogaciones correspondientes, situación que conocía González Zorrilla, S. A., ya que como lo describí en el hecho número 22, el señor Carlos Quijano representante de ésta había amenazado a mi representada de que dejaría que se rematara la mercancía si no se les pagaban los supuestos adeudos... 28. Una vez devueltos los contenedores por mi representada a González Zorrilla, S. A., se le solicitó a estos hicieran entrega de la letra de cambio dada en garantía, así como se le requirió del pago de las erogaciones que había sufrido mi representada por el incumplimiento de la demandada, a lo que con fecha 14 de abril de 1994, González Zorrilla, S. A. envió un fax a mi representada (mismo que se acompaña como anexo 26, manifestando a su Señoría que el original del documento obra en poder de la demandada González Zorrilla, S. A. y solicito se le requiera de su entrega) por medio del cual le informaba que existían demoras que se generaron en las entregas de los contenedores del tercer y cuarto embarque, y se debían liquidar las facturas número [REDACTED] y [REDACTED] por el monto de US\$ [REDACTED] y US\$ [REDACTED]*

ESTADOS UNIDOS  
SECRET  
SUPRE  
JUSTICIA  
LA



respectivamente, facturas de las que no se tenía conocimiento alguno ya que nunca fueron enviadas a mi representada a lo que mi representada se negó a pagar por que no fue la causante de las demoras generadas, ya que la negativa en la entrega de los contenedores fue por parte de las demandadas, existía un incumplimiento previo de éstas, a pesar de habérseles requerido constantemente la entrega de los contenedores y por ende de la mercancía. Lo que es comprobable con el comunicado enviado a mi representada con fecha 18 de abril de 1994 (que se acompaña como anexo 27), en la que anexaron copias de las referidas facturas, así mismo las facturas [REDACTED] y [REDACTED] se encuentran fechadas el 24 de febrero de 1994, siendo que la demandada González Zorrilla, S. A. por su comunicado de 14 de abril de 1994 manifestó que esas facturas ya existían, situación que era desconocida por mi representada ya que no habían sido enviadas con anterioridad. ---

Se hace ver a su Señoría que de la comunicación de fecha 18 de abril de 1994 se desprende la confesión expresa de la demandada González Zorrilla, S. A. en el sentido de que manifiesta haber retenido las mercancías correspondientes al tercer y

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
14 DE ABRIL DE 1994  
A LAS 10:00 AM  
FOLIO 123

*cuarto embarque descritos hasta en tanto no se le liquidaron los supuestos adeudos generados por las demoras en la devolución de los contenedores..."*

Como puede advertirse de la precitada transcripción, la parte actora establece una conectividad o vinculación entre el contrato de transporte marítimo de la mercancía relacionada con los hechos, y los eventos posteriores a la llegada de los embarques de esa mercancía al Puerto de Tampico, Tamaulipas, para su traslado por vía terrestre hasta la Ciudad de México, Distrito Federal, refiriendo dicha actora que la controversia su suscitó con las codemandadas, en relación al préstamo y utilización de varios de los contenedores en los que se transportó la citada mercancía desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hasta el mencionado Puerto de la República Mexicana, lo que incluso **demoró, según sostiene la demandante, la entrega de parte de la multicitada mercancía.**

Dentro de este contexto y tomando en cuenta, como se ha venido señalando en la presente resolución, que por una parte, en el estado actual de los autos, los daños y perjuicios que reclama la actora en su demanda, se refieren a eventos motivados por la falta de cumplimiento por las codemandadas, derivadas de un contrato de transporte marítimo, regulado por la Ley <sup>de</sup> Navegación y Comercio Marítimos vigente en la época de <sup>los</sup> hechos; y por otra parte que también en el estado actual de los autos se da la presunción de que la mencionada actora celebró el



indicado contrato de fletamiento al amparo del denominado transporte multimodal internacional, es que cabe arribar a la conclusión de que es en el Fuero Federal donde radica la jurisdicción para seguir conociendo del aludido juicio ordinario mercantil.

Independientemente de lo anterior, y aún en el supuesto de que con posterioridad se acreditase que el usuario optó por el denominado transporte segmentado, de todas maneras no debe perderse de vista que en las cuestiones relacionadas con el comercio internacional en las que la transportación de mercancías, se haga por vía marítima, históricamente, por su importancia, por su natural carácter extranacional, es decir que frecuentemente intervienen personas físicas y morales pertenecientes a diversas nacionalidades, tal clase de tráfico comercial ha sido regulado por el derecho marítimo y no por el derecho mercantil, como es fácil poner de manifiesto acudiendo al derecho comparado en lo tocante a este ámbito.

Así pues el que las cuestiones de comercio internacional relacionadas con el derecho marítimo, no queden incluidas en la denominada jurisdicción concurrente a que se refiere la fracción I del artículo 104 Constitucional, obedece a importantísimas razones, no sólo de carácter histórico, sino también a la concepción medular de que las referidas actividades de tráfico comercial internacional que tengan que ver con aspectos del derecho marítimo, no queden constreñidas en cuanto a la competencia jurisdiccional para conocer de las controversias que surjan con motivo de dichas actividades, a la competencia de los

LOS METE  
A C R  
D. 17.3  
A E. 100  
12-28-95



Jueces del Fuero Común (por la opción en este sentido que se concede a los demandantes en la ya indicada fracción I del artículo 104 Constitucional), habida cuenta que de lo contrario, es decir de considerar que cuestiones y aspectos de tráfico comercial internacional, al estimar que solamente afectan a los intereses de los particulares, deben quedar encuadrados dentro de lo previsto por la fracción I del artículo 104 de la Constitución General de la República, implicaría en distorsión del sentido y alcances del contenido de esta fracción I, dejar en mano de los Jueces del Fuero Común, controversias que si bien son de índole mercantil, derivan o están vinculadas o relacionadas con el derecho marítimo.

En suma, no hay ninguna incongruencia o contradicción en considerar que cuestiones mercantiles relacionadas con el derecho marítimo, sean del conocimiento de los Tribunales Federales, ya que es precisamente esa relación o vinculación lo que constituye la diferencia específica para no quedar incluidas tales cuestiones en la fracción I del numeral en comento, sino dentro de las controversias que versen o se relacionan con el derecho marítimo.

Finalmente, cabe señalar aquí que no es óbice para la precitada estimación conclusiva en el sentido de que es en el Fuero Federal donde radica la jurisdicción para seguir conociendo del indicado juicio ordinario mercantil, lo referido por el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el sentido de que el artículo 5º., de la Ley de Vías generales de Comunicación, invocado por la Cuarta Sala del Tribunal Superior



85

de Justicia del Distrito Federal (que finca la competencia de los Juzgados Federales, cuando intervenga una empresa de vías generales de comunicación), ya que dicho numeral no puede estar por encima del artículo 104 fracción I, Constitucional, de conformidad con la Tesis Jurisprudencial que dicho Juez Federal invoco bajo la voz de "VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL"; por lo siguiente: tratándose de controversias que versen sobre derecho marítimo, de manera expresa, el Constituyente Permanente establece la previsión en la fracción II del indicado artículo 104 Constitucional, de que su conocimiento jurisdiccional compete a los Tribunales Federales. Ahora bien, bajo esta premisa fundamental, resulta válido considerar que igualmente compete conocer a los Tribunales Federales conocer de las controversias de tráfico comercial internacional derivadas de cuestiones o aspectos regulados por el derecho marítimo, como en la especie hasta ahora se advierte del estado que guardan los autos del juicio ordinario mercantil de referencia; sin que esta consideración conclusiva vaya en contra de la diversa previsión constitucional contemplada en la fracción I del ya referido artículo 104 Constitucional, relativa a la jurisdicción concurrente, por una sencilla razón: cuando en la aplicación de leyes federales las correspondientes controversias sólo afectan a intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, en tanto que cuando con motivo de la aplicación de leyes federales, haya controversias entre particulares, pero que directamente versen sobre derecho marítimo o bien, deriven de aspectos o cuestiones regulados por esta clase de derecho, entonces debe estarse a lo previsto en la

fracción II del precepto constitucional en comento. Luego entonces, independientemente de lo que se prevenga en el citado artículo 5º., de la Ley de Vías Generales de Comunicación, el sustento para fincar la competencia del juicio ordinario mercantil de mérito, se encuentra a nivel constitucional, en la fracción II del artículo 104, por las razones expuestas con antelación; amén de que por otra parte, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos resulta ser la naturalmente aplicable, atento al estado actual de los autos, atendiendo a que el contrato de transporte marítimo (relativo al tráfico comercial internacional), se encuentra regulado por dicha ley.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.-** En el Fuero Federal radica la jurisdicción.

**SEGUNDO.-** El Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal es legalmente competente para conocer del juicio ordinario mercantil número 1349/94 ó 4389/94, promovido por CEREZO, S.A. DE C.V., en contra de GONZALEZ ZORRILLA, S.A., y EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS, S.A., DE C.V.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE JUSTICIA  
LA PAZ

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los



Señores Ministros: Presidente Juventino V. Castro y Castro,  
 Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan  
 N. Silva Meza (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García  
 Villegas.

Firman el Presidente de la Sala y el Ministro Ponente con el  
 Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA

MINISTRO JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.

MINISTRO PONENTE

JUAN N. SILVA MEZA

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA  
 PRIMERA SALA.

ANTONIO MARMOLEJO LOPEZ. LA

FEDERACION

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA COMPETENCIA No. 517/95. SUSCITADA ENTRE EL  
 JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL D. F. Y EL JUEZ  
 TERCERO DE LO CIVIL DEL D. F., PARA CONOCER DEL JUICIO ORDINARIO  
 MERCANTIL 1349/94 ó 128/95, PROMOVIDO POR CEREZO, S.A. DE C.V. EN CONTRA  
 DE GONZALEZ ZORRILLA, S.A. Y OTRA.

México, Distrito Federal a 31 OCT. 1997  
 medio el cual se notificó la resolución anterior a las  
 partes. Doy fe.





SUPREMA C  
JUSTICIA DE L  
SECRETARIA DE J  
LA PRIMER